

CONTRATO NÚMERO  
PROFESIONALES

147

DE 2011, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA JURÍDICA PARA ADELANTAR LA FIJACIÓN DE POLÍTICAS Y LA REGLAMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014, EN LO RELACIONADO CON EL SECTOR TRANSPORTE

VALOR: \$75.000.000,00 INCLUIDO IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

CONTRATISTA: IVAN DARIO GÓMEZ LEE

Entre los suscritos: **ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía 75.087.996 expedida en Manizales - Caldas, en su condición de Secretario General, según Decreto 3123 del 19 de agosto de 2010 y Acta de Posesión 042 del 23 de agosto de 2010, quien obra en nombre y representación del **MINISTERIO DE TRANSPORTE**, facultado al respecto por las Leyes 80 de 1993, 489 de 1998 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 0087 del 17 de enero de 2011 y la Resolución de delegación número 003676 del 26 de septiembre de 2011, quien en adelante se denominará el **MINISTERIO**, por una parte, y de otra **IVAN DARIO GÓMEZ LEE**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.410.929, expedida en Bogotá D.C, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1) Que de acuerdo con el Decreto 087 del 17 de enero de 2011, el Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo 2) Que el artículo 7° Numeral 7.1 del Decreto 087 de 2011, señala que es competencia de la Oficina de Planeación asesorar al Ministro y Viceministros en la definición, coordinación y adopción de las políticas sectoriales, estrategias, planes, programas y proyectos para garantizar el cumplimiento de los objetivos sectoriales 3) Que para el cumplimiento de los anteriores objetivos, la Oficina Asesora de Planeación requiere contar con un profesional con experiencia en asuntos jurídicos de la administración pública que apoye en la formulación de propuestas normativas relacionadas con la reglamentación del actual Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos 2010 - 2014", y de esta manera lograr una propuesta jurídica para adelantar la

1. MEMORANDUM FOR THE RECORD  
 2. SUBJECT: [REDACTED]  
 3. REFERENCE: [REDACTED]  
 4. DATE: [REDACTED]  
 5. BY: [REDACTED]  
 6. FOR: [REDACTED]  
 7. FROM: [REDACTED]  
 8. TO: [REDACTED]  
 9. THAT [REDACTED]  
 10. IT IS THE POLICY OF THE [REDACTED]  
 11. TO [REDACTED]  
 12. AND [REDACTED]  
 13. THE [REDACTED]  
 14. THE [REDACTED]  
 15. THE [REDACTED]  
 16. THE [REDACTED]  
 17. THE [REDACTED]  
 18. THE [REDACTED]  
 19. THE [REDACTED]  
 20. THE [REDACTED]  
 21. THE [REDACTED]  
 22. THE [REDACTED]  
 23. THE [REDACTED]  
 24. THE [REDACTED]  
 25. THE [REDACTED]  
 26. THE [REDACTED]  
 27. THE [REDACTED]  
 28. THE [REDACTED]  
 29. THE [REDACTED]  
 30. THE [REDACTED]  
 31. THE [REDACTED]  
 32. THE [REDACTED]  
 33. THE [REDACTED]  
 34. THE [REDACTED]  
 35. THE [REDACTED]  
 36. THE [REDACTED]  
 37. THE [REDACTED]  
 38. THE [REDACTED]  
 39. THE [REDACTED]  
 40. THE [REDACTED]  
 41. THE [REDACTED]  
 42. THE [REDACTED]  
 43. THE [REDACTED]  
 44. THE [REDACTED]  
 45. THE [REDACTED]  
 46. THE [REDACTED]  
 47. THE [REDACTED]  
 48. THE [REDACTED]  
 49. THE [REDACTED]  
 50. THE [REDACTED]  
 51. THE [REDACTED]  
 52. THE [REDACTED]  
 53. THE [REDACTED]  
 54. THE [REDACTED]  
 55. THE [REDACTED]  
 56. THE [REDACTED]  
 57. THE [REDACTED]  
 58. THE [REDACTED]  
 59. THE [REDACTED]  
 60. THE [REDACTED]  
 61. THE [REDACTED]  
 62. THE [REDACTED]  
 63. THE [REDACTED]  
 64. THE [REDACTED]  
 65. THE [REDACTED]  
 66. THE [REDACTED]  
 67. THE [REDACTED]  
 68. THE [REDACTED]  
 69. THE [REDACTED]  
 70. THE [REDACTED]  
 71. THE [REDACTED]  
 72. THE [REDACTED]  
 73. THE [REDACTED]  
 74. THE [REDACTED]  
 75. THE [REDACTED]  
 76. THE [REDACTED]  
 77. THE [REDACTED]  
 78. THE [REDACTED]  
 79. THE [REDACTED]  
 80. THE [REDACTED]  
 81. THE [REDACTED]  
 82. THE [REDACTED]  
 83. THE [REDACTED]  
 84. THE [REDACTED]  
 85. THE [REDACTED]  
 86. THE [REDACTED]  
 87. THE [REDACTED]  
 88. THE [REDACTED]  
 89. THE [REDACTED]  
 90. THE [REDACTED]  
 91. THE [REDACTED]  
 92. THE [REDACTED]  
 93. THE [REDACTED]  
 94. THE [REDACTED]  
 95. THE [REDACTED]  
 96. THE [REDACTED]  
 97. THE [REDACTED]  
 98. THE [REDACTED]  
 99. THE [REDACTED]  
 100. THE [REDACTED]

**CONTRATO NUMERO 147 DE 2011, DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.**

**OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA JURIDICA PARA ADELANTAR LA FIJACION DE POLITICAS Y LA REGLAMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014, EN LO RELACIONADO CON EL SECTOR TRANSPORTE**

**VALOR: \$75.000.000,00 INCLUIDO IVA**

**PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES**

**CONTRATISTA: IVAN DARIO GOMEZ LEE**

mil pesos (\$62.500.000,00), moneda corriente **CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE**

**PAGO.** El Ministerio pagará al contratista el valor del presente contrato a título de honorarios por mensualidades vencidas, a razón de **DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$12.500.000,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA**, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la suscripción entre el supervisor designado por el Ministerio y el contratista de las actas de recibo de prestación

de servicios y otros, previa presentación de la factura correspondiente y el respectivo informe mensual. **PARAGRAFO PRIMERO:** para cada pago el **CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, circunstancia que deberá ser verificada por el supervisor del contrato como requisito para cada pago, de conformidad con el parágrafo 1º Del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** El MINISTERIO pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato en la cuenta de ahorros número 009900170383 del Banco Davivienda, la cual se encuentra vigente. **PARAGRAFO TERCERO:** En todo caso, los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996. **CLÁUSULA**

**SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo del objeto del presente contrato el **CONTRATISTA** contrae las siguientes obligaciones: **1)** Constituyen derechos y deberes del **CONTRATISTA** para efectos del presente contrato los contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993; **2)** El contratista se obliga al cumplimiento oportuno de todas las normas laborales legales y convencionales vigentes; **3)** El contratista deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades: a) Preparación de los proyectos de actos administrativos requeridos para reglamentar lo relativo a la expropiación, redes de servicios públicos y sistemas inteligentes de transporte de la Ley 1450 de 2011 y los demás

que sean requeridos por el supervisor del contrato. b) Asistir a las mesas de trabajo que fijen las posiciones institucionales o sectoriales y proyectar las actuaciones que se requieran, revisar jurídica e institucionalmente las propuestas de este grupo. c) Preparar la reglamentación que solicite el señor Ministro de Transporte y participar en las reuniones de análisis y mejoramiento de los mismos. d) En cumplimiento del objeto contractual, ejecutará las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato. e) Rendir informes mensuales por escrito al supervisor del contrato sobre las actividades adelantadas y de su gestión.

**CLÁUSULA SEPTIMA: - GARANTÍA:** De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Decreto 4828 de 2008, El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MINISTERIO una garantía que ampare el cumplimiento general del contrato en cuantía del 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. **CLÁUSULA OCTAVA: - INDEMNIDAD:** El CONTRATISTA mantendrá indemne al MINISTERIO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

**CLÁUSULA NOVENA: - RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL:** Para efectos de dar cumplimiento al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995 concordante con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el CONTRATISTA deberá acreditar con anterioridad al perfeccionamiento del presente contrato su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión.

**CLÁUSULA DÉCIMA: - CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del MINISTERIO, pudiendo este reservarse la razón o razones que tenga para negar la cesión o subcontrato.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: - CADUCIDAD:** El MINISTERIO podrá declarar la caducidad del presente contrato por medio de resolución motivada si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, para lo cual se dará por terminado y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

**PARAGRAFO UNICO:** Igualmente, el MINISTERIO podrá declarar la caducidad del presente contrato, cuando se den las circunstancias previstas en el numeral 5° del artículo 5° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DUODÉCIMA: - MULTAS:** Si durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA incumple alguna o

**CONTRATO NUMERO**

**147**

**DE 2011, DE PRESTACION DE**

**SERVICIOS PROFESIONALES.**

**OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA JURIDICA PARA ADELANTAR LA FIJACION DE POLITICAS Y LA REGLAMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014, EN LO RELACIONADO CON EL SECTOR TRANSPORTE**

**VALOR: \$75.000.000,00 INCLUIDO IVA**

**PLAZO DE EJECUCION: SEIS (6) MESES**

**CONTRATISTA IVAN DARIO GÓMEZ LEE**

algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato, el **MINISTERIO** le impondrá multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la deducción de las multas no exonerará al

**CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA PENAL**

**PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, el **CONTRATISTA** se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, suma que se hará efectiva directamente por el **MINISTERIO** considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarsele. El **CONTRATISTA** autoriza al **MINISTERIO** para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en el punto anterior de cualquier suma que le adeude el **MINISTERIO** por este u otro contrato o concepto, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía o efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas no exonerará al

**CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN,**

**MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Son aplicables a este contrato las disposiciones consignadas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80

de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN**

**LABORAL:** El **CONTRATISTA** ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre el **MINISTERIO** y el **CONTRATISTA**, ni con el personal que este llegare a utilizar para el desarrollo del objeto contractual. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

**SUPERVISIÓN:** El **MINISTERIO** vigilará el cumplimiento de las obligaciones a



cargo del **CONTRATISTA**, a través del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, quien ejercerá como Supervisor entre otras las siguientes funciones: 1) Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes y con las estipuladas en el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos del Ministerio de Transporte, adoptado mediante Resolución número 002444 del 18 de junio de 2010; 2) Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo. 3) Suscribir las actas de iniciación y de recibo a satisfacción de los servicios objeto del presente contrato y remitirlas al Grupo Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica para el respectivo archivo y al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera para el correspondiente pago. 4) Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el **CONTRATISTA** y remitirlos al Grupo Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica para el respectivo archivo. 5) Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviar copia al Grupo Contratos de la Oficina Asesora de Jurídica. 6) Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en el, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, deberá informar inmediatamente a la Oficina Asesora de Jurídica del **MINISTERIO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR** En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993 y 734 de 2002 y demás normas concordantes. **PARAGRAFO SEGUNDO** Mediante comunicación escrita, el Secretario General podrá reemplazar el supervisor aquí designado. **CLÁUSULA**

**DÉCIMA SEPTIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES** En caso de presentarse alguna controversia durante el desarrollo del presente contrato, las partes podrán acudir al acuerdo, arreglo directo o transacción; en caso de no llegar a una solución en forma directa, se podrá acudir a la amigable composición y/o conciliación. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. -**

**INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES** El **CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en

CONTRATO NÚMERO  
SERVICIOS PROFESIONALES.

147

DE 2011, DE PRESTACIÓN DE

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA JURÍDICA PARA ADELANTAR LA FIJACIÓN DE POLÍTICAS Y LA REGLAMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014, EN LO RELACIONADO CON EL SECTOR TRANSPORTE

VALOR: \$75.000.000,00 INCLUIDO IVA

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

CONTRATISTA: IVAN DARIO GÓMEZ LEE

los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. **CLAUSULA DECIMA NOVENA.**

**LIQUIDACIÓN** El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, concordante con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA VIGESIMA.**

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes y la expedición del registro presupuestal correspondiente por parte del MINISTERIO, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 71 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996. Para su ejecución se requiere de la suscripción del acta de iniciación, previa aprobación de la garantía por parte del MINISTERIO y acreditación por parte del CONTRATISTA de encontrarse al día en el pago de aportes relativos con el sistema de seguridad social integral en salud y pensión. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El CONTRATISTA con fecha 03 de Noviembre de 2011 presentó por escrito su manifestación de interés de no afiliarse al Sistema de Riesgos Profesionales, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo tercero del Decreto 2800 de 2003, documento que es parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Con base en lo anterior, el

**CONTRATISTA** exonera al Ministerio de cualquier responsabilidad frente accidentes o enfermedades laborales ocurridas durante la ejecución del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- PUBLICACIÓN** Una vez perfeccionado el presente contrato, deberá ser publicado en el Diario Único de Contratación Pública por parte del CONTRATISTA requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes lo cual deberá efectuar dentro de los tres (3) días hábiles

siguientes a la fecha de la solicitud que para tal efecto le haga el **MINISTERIO**.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., el 23 de 2011

**POR EL MINISTERIO**

**ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ**

Secretario General

**POR EL CONTRATISTA**

**IVAN DARIO GOMEZ LEE**

Revisaron OJJ Isabel Cristina Sinisterra - Nazly Janne Delgado Vilami

Contrato Prestación de Servicios Profesionales - Noviembre de 2011

**MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**LA COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICA:**

Que para el contrato No. 147 de 2011 se expidió

El Registro Presupuestal del Compromiso

Numero 364 del día 02 mes 12 año 2011

**CON CARGO A LA SIGUIENTE IMPUTACION PRESUPUESTAL**

**UNIDAD EJECUTORA 240101- 600**

Cuenta Subcuenta Objeto del Gasto Ordinal

Subordinal Recurso

Programa 410 Subprograma 600 Proyecto 27 Subproyecto Recurso

Valor (\$ 12.500.000)

**FIRMA**

**Agencias Futuras 2012 \$ 62.500.000**





Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NTT. 899.999.055-4

63  
Prosperidad  
para todos

MEMORANDO

2011330214363



02-12-2011

Bogotá D.C., 02-12-2011

PARA: Doctora **BERTHA INES PARDO ACERO**, Coordinadora Grupo Presupuesto.

DE: Coordinadora Grupo Contratos

ASUNTO: Contrato No. 147/11, de Prestación de Servicios Profesionales

Con el fin que esa dependencia imponga el correspondiente registro presupuestal y posteriormente devuelva a este Grupo, atentamente remito a usted el siguiente contrato:

Número Contrato	Valor Contrato	Contratista
147/11	\$75.000.000,00 Incluido IVA	IVÁN DARIO GOMEZ LEE

Cordial saludo,

*Isabel Cristina Vargas Sinisterra*  
ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

Anexo: Una (1) carpeta del contrato 147/11 y Seis (6) folios

Copias: Consecutivo Grupo Contratos, carpeta contrato 147/11

Proyectó: W. Alexander Sanabria C.  
Revisó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra  
Fecha de elaboración: 02-12-2011  
Número de radicado que responde: RAD\_NA  
Tipo de respuesta: Total(X) Parcial ( )

02 DIC. 2011



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NTT. 899.999.055-4

Prosperidad  
para todos

MEMORANDO  
20113260215763



05-12-2011

Bogotá, 05-12-2011

PARA: DOCTORA, ISABEL CRISTINA VARGAS S., COORDINADORA GRUPO  
CONTRATOS

DE: COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

ASUNTO: Devolución carpeta contrato 147/11.

Sin trámite presupuestal, atentamente devuelvo la carpeta del contrato 147 de 2011, de prestación de servicios profesionales celebrado con Iván Darío Gómez Lee, remitida con memorando 20111330214363 del 02 de diciembre de 2011.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato, presenta inconsistencia en el valor escrito en números en la Cláusula Cuarta.- Apropriación Presupuestal.

Cordialmente,

BERTHA INES PARDO ACERO

Anexo: Carpeta contrato 147/2011

Elaboró: Lilian R.  
Revisó: Bertha I. Pardo A.  
Fecha de elaboración: 5-dic-2011  
Número de radicado que responde: 20111330214363  
Tipo de respuesta: Total(X) Parcial ( )

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comproba ve

Unidad Ejecutora: 24-01-01-000

Unidad Subordinada: Efectos y Gastos

Fecha y Hora: 2011-12-05-09:16 a.m.

Ministrante: Gloria Marlen Custaneda Leon

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

# REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CDM PROMISO

Con base en el CDP No. 3D411 de fecha 2011-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Unidad Ejecutora:	Unidad Subordinada:	Unidad Subordinada:
24-01-01-000	MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL	MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	Valor Actual:	Valor Final:
12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00

## TERCERO

Identificación: 804-0929 Razon Social: IVAN DARIO GOMEZ LEE

Numero: 005003703833 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Identificación: 75327956 Nombre: ALVARO JAVIER MASHINEZ

Identificación: CAJA MENOR

## CUENTA BANCARIA

## ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 75327956 Nombre: ALVARO JAVIER MASHINEZ

Identificación: CAJA MENOR

Identificación: 75327956 Nombre: ALVARO JAVIER MASHINEZ

Identificación: CAJA MENOR

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0022 MINTRANSPORTE - Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	C-410-500-27 LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE	Nación	11	CSF	2012-01-04	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
Total:						12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMULACION DE UNA PROPOSICION JURIDICA PARA ADELANTAR LA ELABORACION DE

## PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	3-8	2012-01-04	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO

# Reporte Compromiso de Vigencias futuras

Compromiso

Elmer Alfonso Barraz Hernández  
MINTRANSPORTE - GESTION

Unidad Ejecutora: Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema: 2011-12-05-10:06 a.m.

Unidad / Subunidad Ejecutora - Identificación	24-01-01-000
Unidad / Subunidad Ejecutora - Descripción	MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Identificación del usuario que efectuó el registro	
Número de Compromiso de vigencias futuras	711
Fecha de Compromiso de vigencias futuras	2011-12-05
Estado del compromiso de vigencias futuras	Generado
Contrato(s)	
Tercero - Identificación	Cédula de Ciudadanía 80410329
Tercero - Nombre	IVAN DARIO GOMEZ LEE
Medio de Pago	Abono en cuenta
Cuenta bancaria - Número	009900170383
Cuenta bancaria - Nombre	IVAN DARIO GOMEZ LEE
Cuenta bancaria - Identificación entidad	860034313
Cuenta bancaria - Razón social entidad	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cuenta bancaria - Tipo	Ahorro
Cuenta bancaria - Estado	Activa
Autorización de vigencias futuras	66011
Valor total del compromiso en pesos	62.500.000,00
Ordenador del gasto - Identificación	Cédula de Ciudadanía 75087996
Nombre del ordenador del gasto	ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
Cargo del ordenador del gasto	SECRETARIO GENERAL

## VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos				
Autorización	Identificación	Descripción	Fuente	Recurso
66011	C-410-600-27	LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS	Nación	OTROS RECURSOS DEL TESO
Valor con cargo a vigencias futuras				62.500.000,00

67

**IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**

Ciudad: Bogotá Fecha: 2011 12 08

Nombre de la Cuenta: **IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**

REFERENCIA 2 **0526913**

No. CUENTA RECAUDADORA  
**001969999539**



COD.	CONCEPTO PUBLICACIÓN	DETALLE
1	Diario Único de Contratación	No. Control: <u>147</u> Valor S: <u>2.000.000</u>

REFERENCIA 1 (Nit entidad contratante):

Nombre: Imprenta Nacional de Colombia  
(Nit / C.C. entidad contratista): 90000313-7  
Tel: 01-270

COD. BANCO	No. CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

COD.	CONCEPTO PUBLICACIÓN	Nº Documento
2	Publicaciones	
2.1	Edictos	
2.2	Avisos Judiciales	
2.3	Resoluciones	
2.4	Sentencias	
2.5	Decretos	
3	Suscripciones	
4	Pagos Facturas	

TOTAL CHEQUES: 164.600

TOTAL EFECTIVO: 164.600

TOTAL CONSIGNACIÓN: 164.600

N.T. 000.034.313-7 A-10570 Rev. VI - 06

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

**PROCESADO**

CAJERO No. 4 HN

08 DIC. 2011

ESTADÍSTICA DE ENTIDAD FINANCIERA





# DAVIVIENDA

REFERENCIA 2 1308255

Ciudad	Bogotá	Fecha	20-11-03
Nombre de la Cuenta: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA			

Nº. CUENTA RECAUDADORA  
001969999539



VERIFICADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COD.	CONCEPTO PUBLICACIÓN	DETALLE
1	Diario Único de Contratación	No. Contrato 145 de 2011 Valor \$ 81.758.162

REFERENCIA 1 (Nit entidad contratante): 899.799.055-4  
Nombre: MUNI DE TRAVELOTE  
(Nit / C.C. entidad contratista): 300147102-7  
Nombre: SUIO REDES INGENIERIA LTDA  
Tel: 3451101

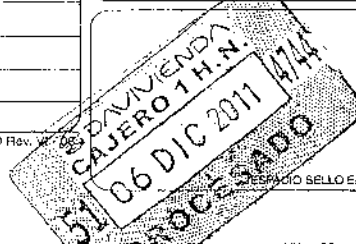
COD. BANCO	No. CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

COD.	CONCEPTO PUBLICACIÓN	MANIESTRO X	No. Documento
2	Publicaciones		
2.1	Edictos		
2.2	Avisos Judiciales		
2.3	Resoluciones		
2.4	Sentencias		
2.5	Decretos		
3	Suscripciones		
4	Pagos Facturas		

TOTAL CHEQUES	
TOTAL EFECTIVO	264.600
TOTAL CONSIGNACIÓN	264.600

NIT. 880.034.318-7 A110570 Rev. 1

LEER INSTRUCCIONES AL CORSO



ESPACIO SELLO ENTIDAD FINANCIERA

Barco Davivienda S.A.

- CLIENTE -



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
PROCESO CONTRATACIÓN  
INSTRUCCIONES TRÁMITE CONTRATO PRINCIPAL

Código: CTN-F-005 Versión: 1

CONTRATO No.

147 de 2011

Valor contrato \$ 75.000.000,00

Plazo SEIS (6) MESES

1. PAGO DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Consignando en la cuenta corriente del Banco Agrario número 3192000339-4, o en Davivienda, cuenta corriente número 001969999539, a nombre de la Imprenta Nacional de Colombia. Adicionalmente, en Bogotá se puede cancelar en las instalaciones de la Imprenta, carrera 66 No. 24-09 en BOGOTÁ D.C.

Igualmente, los pagos por derechos de publicación de contratos en el D.U.C., se podrán efectuar a través de la página Web de la Imprenta Nacional de Colombia en el vínculo "Pagos en Línea" ([www.imprenta.gov.co](http://www.imprenta.gov.co)).

El reporte imprimible de la transacción o copia al carbón de la consignación y CUATRO (4) fotocopias de los mismos deberán ser presentados al Grupo Contratos de la Oficina Asesora Jurídica para la respectiva legalización del Contrato. Ver tarifas al respaldo.

Valor a consignar:

\$ 764.600

Amparo	Porcentaje	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	20%	\$ 15.000.000	2/12/2011	7/10/2012
PAGO ANTICIPADO				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO				
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
ESTABILIDAD				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL BENEFICIARIO "TERCEROS AFECTADOS"				
LA CALIDAD DE LOS BIENES				
CORRECTO FUNCIONAMIENTO				

2. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA: Si el contrato es suscrito con un Consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal relacionando NIT o No. de Cédula de Ciudadanía e indicando cada uno de sus integrantes y el porcentaje de participación. El afianzado o asegurado será el Ministerio de Transporte. La póliza o garantía deberá ser firmada por el CONTRATISTA O AFIANZADO. Adjuntar el recibo de pago de la prima para la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. **NOTA:** La Compañía Aseguradora que constituya la garantía para este contrato, deberá dar cumplimiento al Decreto 490 del 20 de febrero de 2009, el cual modifica el artículo 28 del Decreto 4828 de 2008. En consecuencia, las condiciones generales de cada póliza deberán ser remitidas en original junto con las mismas, al Ministerio de Transporte.

3. PLAZO Y SITIO PARA PRESENTAR LOS ANTERIORES DOCUMENTOS: 3 días hábiles a partir del recibo del presente, en el Grupo Contratos de la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte.

Hoy, \_\_\_\_\_ recibí copia del contrato arriba citado.

FIRMA: \_\_\_\_\_ CC \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Elaboró: O.R.C

Revisó:



Ministerio de Transporte  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

MEMORANDO

20111210217033



Fecha: 06-12-2011

PARA: Dra. ISABEL CRISTINA VARGAS S. – Coordinadora Grupo Contratos

DE: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
Supervisor Contrato 147-11

ASUNTO: Envío pólizas de cumplimiento.

Para los fines pertinentes, con toda atención se remito el original de la póliza de cumplimiento número 11-44-101029319 expedida por Seguros del Estado a nombre de IVAN DARIO GOMEZ LEE, con quien se suscribió el contrato número 147 del año en curso.

Cordialmente,

CÉSAR AUGUSTO PEÑALOZA PABÓN  
Supervisor

Anexo: 5 folios.

Proyectó: Angela M.  
Elaboró: Angela M.  
Revisó: César Peñaloza  
Fecha de elaboración: 06-12-11  
Número de radicado que responde: 20111210217033  
Tipo de respuesta Total( ) Parcial( )

ponico  
6/12/11

Recibido  
Diciembre 6/11  
3:30 pm



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición BOGOTÁ, D.C.			Sucursal BOGOTÁ			Ced. Sucursal 11		No. Póliza 11-44-101028319		Anexo 0	
Fecha Expedición Día Mes Año 06 12 2011			Vigencia Desde Día Mes Año 02 12 2011			A las Horas 00:00		Vigencia Hasta Día Mes Año 07 10 2012		A las Horas 00:00	
Tipo de Movimiento EMISION ORIGINAL											

Nombre o Razon Social: GOMEZ LEE, IVAN DARIO		Identificación: 80.410.929	
Dirección: CLL 71 NO. 5-23		Ciudad: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		Teléfono: 2498139	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
Asegurado / Beneficiario: MINISTERIO DE TRANSPORTE	
Identificación: 899.999.005	
Dirección: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
Teléfono: 0	


OBJETO DEL SEGURO	
Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010A, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A. garantiza:	
EL CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATO NO 147 DE 2011, REFERENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA JURIDICA PARA ADELANTE LA FICACION DE POLITICAS Y LA RESUMPTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2019, EN LO RELACIONADO AL SECTOR TRANSPORTE.	

AMPAROS	
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.	
AMPAROS	
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL	
CUMPLIMIENTO 02/10/2011 07/10/2012 915,000,000.00	
OBSERVACIONES	

Valor Prima Neta		Gastos Expedición		IVA		Total a Pagar		Valor Asegurado Total		Fecha Límite de Pago	
\$ *****50,958.00		\$ *****7,000.00		\$ *****9,273.00		\$ *****67,232.00		\$ *****15,000,000.00		/ /	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
DIRECTA		4013		100.00							




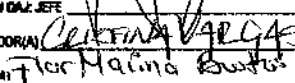
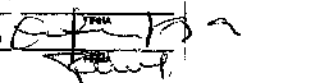



QUEOA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de seguros del Estado S.A. es Carrera 13A No 96-26 - Teléfono: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL BOGOTÁ CARRERA 13A N° 96-26 - TEL: 218-0903 11-44-101028319		 14151770999R03211571802011000603024464139001000000057232196120122201		REFERENCIA PAGO: 1100060302446-4	
FIRMA AUTORIZADA: Ramiro García Berrio - Vicepresidente de Finanzas		FIRMA TOMADOR		ANGELICAREINA	

Verdad puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Dificina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Teléfono: 2186977

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE		
<div>2019</div> <div>APROBACION GARANTIA</div>		
APROBO		
REVISARON DEL JEFE		
COORDINADOR(A)		
APROBACION		



**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION  
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101028319, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 4828 de 2008, el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 06 días del mes de DICIEMBRE de 2011



SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
SUCURSAL BOGOTA  
CRA 13A N° 36-08 - TEL.: 218 00 03

11-44-101028319

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro García Barria - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT 860.009.578-6

72

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO  
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

No. \_\_\_\_\_ Ajustada a los Decretos 4828 de 2008 y 2493 de 2009

**1. AMPAROS**

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE, ATRIBUIBLES A SU ACCIÓN O OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO PODRÁ RECLAMAR EL VALOR ASEGURADO DE UN AMPARO PRETENDIENDO LA INDEMNIZACIÓN DE OTROS QUE, NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

**1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, MATERIALIZADO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO Y GARANTIZADO.-
- 1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO LA PRÓRROGA NO EXCEDA UN PLAZO DE TRES (3) MESES.-
- 1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO Y GARANTIZADO, DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EXIGIDA POR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.-
- 1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- 1.1.5 LA FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

PREVISTO COMO UNO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

**1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II) O EL USO INDEBIDO Y (III) O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO, REALICE DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CUANDO SE TRATE DE BIENES DISTINTOS DE DINERO, ENTREGADOS COMO ANTICIPO. ÉSTOS DEBERÁN HABERSE TASADO PREVIAMENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

**1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS**

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. CUANDO SE TRATE DE BIENES, DISTINTOS AL DINERO, ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO, ÉSTOS DEBERÁN HABERSE TASADO PREVIAMENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

PARA EFECTO DE LOS AMPAROS PREVISTOS EN LOS NUMERALES 1.2 Y 1.3, DE ESTA CONDICIÓN, SALVO ACEPTACIÓN EXPRESA Y PREVIA DE SEGURESTADO, NO SE CUBRIRÁN ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS ENTREGADOS AL GARANTIZADO, EN DINERO EN EFECTIVO O EN TÍTULOS VALORES DIFERENTES AL CHEQUE.

**1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE LE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL GARANTIZADO, POR LA FIRMA DEL CONTRATO, ASÍ COMO POR SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO.- ESTE

AMPARO COMPRENDE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGAREN A OCASIONAR, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE POR LA SOLIDARIDAD LABORAL SE VEA OBLIGADA A ASUMIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

ESTE AMPARO EN NINGÚN EVENTO, CUBRE AL PERSONAL VINCULADO POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, BAJO MODALIDADES DIFERENTES A LAS DE UN CONTRATO DE TRABAJO.

#### 1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

#### 1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO (I) ORIGINA- DOS POR LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

#### 1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL MISMO.

#### 1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

ESTA PÓLIZA CUBRIRÁ TAMBIÉN, LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, IMPUTABLES AL

CONTRATISTA GARANTIZADO, Y DERIVADOS DE UN FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO TA- LES PERJUICIOS IMPLIQUEN UN DETRIMENTO PATRIMONIAL PARA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y QUE SE ENCUENTREN BAJO LA COBERTURA DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN ESTA GARANTÍA ÚNICA. NO PROCEDERÁ ESTA COBERTURA, SI LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HUBIERE DIRECTAMENTE ELLA, HECHO EFECTIVOS TALES AMPAROS, A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

#### 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZA- DO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURA- DA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4 EL DESEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

#### 3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada en la carátula de esta póliza para cada amparo, delimita la responsabilidad máxima de SEGURESTADO en caso de siniestro.

#### 4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados en la presente póliza, se hará constar en la carátula de la misma o en sus anexos.

#### 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Para lograr la efectividad de cualquiera de los amparos otorga- dos en esta póliza, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de defensa y el debido proceso que le asisten tanto al contratista GARAN- TIZADO, así como a SEGURESTADO, de conformidad con las normas establecidas en el Código Contencioso Administrativo y la legislación de Contratación Estatal vigente.

El procedimiento que debe seguir LA ENTIDAD ESTATAL ASE- GURADA, para la efectividad de los amparos otorgados por esta póliza, será el siguiente:

5.1 En el evento de que se decreta la caducidad del contrato **GARANTIZADO**, una vez agotado el debido proceso y ejercidos los derechos de defensa y contradicción del contratista **GARANTIZADO** y de **SEGURESTADO**, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, proferirá la resolución administrativa correspondiente, en la cual, además de la declaratoria de caducidad contractual, deberá hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista **GARANTIZADO** como a **SEGURESTADO**, previa liquidación del contrato **GARANTIZADO**.

5.2 En el evento de imposición de multas (previstas en el contrato) al contratista **GARANTIZADO**, una vez agotado el debido proceso y ejercidos los derechos de defensa y contradicción por el mismo y por **SEGURESTADO**, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, proferirá la resolución administrativa correspondiente, de imposición de la multa y ordenando su pago en primer término al contratista **GARANTIZADO**, y en defecto del pago por éste, ordenar la efectividad del amparo de cumplimiento de ésta póliza a **SEGURESTADO**.

5.3 En los demás eventos de incumplimiento del contratista **GARANTIZADO**, y una vez cumplido el procedimiento administrativo previo y ejercidos los derechos de defensa y contradicción de éste y de **SEGURESTADO**, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, deberá proferir la resolución administrativa correspondiente, en la cual declare el incumplimiento de la obligación contractual o postcontractual respectiva, y proceda a cuantificar el monto de la pérdida (o a hacer efectiva la cláusula penal si ella está pactada, entrándose del amparo de cumplimiento,) y a ordenar su pago al contratista **GARANTIZADO**, y a **SEGURESTADO**, previa orden de efectividad del amparo respectivo. Siempre que se busque la afectación de los amparos de Cumplimiento, de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo o de Devolución de Pagos Anticipados, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, deberá previamente tramitar con todas las formalidades legales, la liquidación del contrato **GARANTIZADO**.

## 6. COMPENSACIÓN

**LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, desde el momento de tener conocimiento del incumplimiento del contratista **GARANTIZADO**, o con posterioridad a tal conocimiento o como resultado de la liquidación del contrato **GARANTIZADO**, resultare deudor por cualquier concepto, del contratista **GARANTIZADO**, deberá aplicar la compensación prevista en las normas legales, con las obligaciones a cargo del contratista **GARANTIZADO**, que surjan de los actos administrativos proferidos por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, ante el incumplimiento contractual de aquel. Si luego de aplicada la compensación, quedaren saldos a favor de **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, tales saldos deberán ser cobrados en primer término al contratista **GARANTIZADO**, y en defecto del pago que éste realice, a **SEGURESTADO**.

La indemnización que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, le cobre y exija a **SEGURESTADO**, deberá disminuirse en el valor correspondiente a los bienes que la primera citada, haya obtenido del contratista **GARANTIZADO**, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

## 7. PAGO DEL SINIESTRO.

**SEGURESTADO** pagará el valor del siniestro, que afecte los distintos amparos de esta póliza, siempre que se observe por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

7.1. Para el caso previsto en el Numeral 5.1., de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, acompañada de una copia auténtica del Acto o actos Administrativos correspondientes, con la respectiva constancia de ejecutoria, y de los actos de liquidación del contrato, debidamente ejecutoriados.

7.2 Para el caso previsto en el numeral 5.2., de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, acompañada de la copia auténtica del Acto o actos administrativos, (de imposición de multa) debidamente ejecutoriados, junto con la constancia de **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** relativa a la no existencia de saldos a favor del Contratista **GARANTIZADO**, que no haga procedente la compensación, o la constancia del saldo de la obligación a cargo de **SEGURESTADO**, luego de efectuada la compensación

7.3 Para el caso previsto en el Numeral 5.3, de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, acompañada de una copia auténtica del Acto o actos administrativos ejecutoriados, en el que se hubieren hecho efectivos el amparo o los amparos correspondientes, y cuantificada la pérdida sufrida por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, junto con la constancia de la misma, relativa a la no existencia de saldos a favor del Contratista **GARANTIZADO**, que no haga procedente la compensación, o la constancia del saldo de la obligación a cargo de **SEGURESTADO**, luego de efectuada la compensación.

**PARÁGRAFO.- SEGURESTADO**, en virtud de precisas normas legales podrá optar, bajo su entera discreción, cumplir la prestación asegurada debida, mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada hasta su terminación.

La declaratoria de caducidad no impedirá que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través de **SEGURESTADO** (como pago del siniestro, de conformidad con el inciso anterior) o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, si a ello hubiere lugar.

## 8. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada de esta póliza deba ser aumentada o disminuida y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato garantizado original sean modificadas, **SEGURESTADO**, deberá expedir un certificado o anexo de

modificación de la póliza, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones convenidas entre el contratista **GARANTIZADO** y **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**.

#### 9. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización, que realice **SEGURESTADO**, y de conformidad con precisos preceptos legales, esta última se subroga hasta la concurrencia de su importe, en todos los derechos que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** adquiera contra el contratista **GARANTIZADO** responsable del siniestro.

#### 10. NOTIFICACION A MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE RIESGO

En el evento que se introduzcan cambios a los términos del contrato garantizado, éstas deberán ser notificadas por parte del **GARANTIZADO** de la póliza a **SEGURESTADO**, con el envío del documento donde consten tales modificaciones debidamente suscrito por las partes, para que se expida el certificado correspondiente, en caso de aceptar los términos del nuevo riesgo.

#### 11. CLÁUSULA DE GARANTÍAS

**SEGURESTADO** otorga el presente seguro bajo las siguientes garantías, aceptadas por el contratista **GARANTIZADO** y por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**:

- a. Que **SEGURESTADO** tendrá plena facultad y derecho de ejercer la vigilancia sobre el contratista **GARANTIZADO** en la ejecución del contrato **GARANTIZADO**, para lo cual **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** le prestará la colaboración necesaria, facilitándole las autorizaciones e inspecciones a que haya lugar.
- b. Que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** ejercerá estricto control sobre el desarrollo del contrato garantizado y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes, a través de interventorías directas o legalmente contratadas por ella.
- c. Que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, verificará durante la vigencia del contrato **GARANTIZADO**, que el contratista **GARANTIZADO**, se encuentra cumpliendo con sus obligaciones patronales relativas al sistema integral de seguridad social establecido en las normas legales sobre la materia.
- d. Que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, agotará los mecanismos alternativos de solución de conflictos pactados por las partes en el contrato **GARANTIZADO**, antes de acudir a la efectividad de esta póliza.

El incumplimiento de estas garantías, dará lugar a la aplicación de los efectos que la Legislación Comercial Colombiana, tiene establecidas para tales violaciones.

#### 12. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

La presente póliza no podrá ser cancelada, por falta de pago de la prima ni por revocación unilateral de las partes en el contrato de seguros.

#### 13. NATURALEZA DE ESTE SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación, no es solidaria, ni incondicional y la exigibilidad de sus amparos está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

#### 14. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la póliza y las cláusulas del contrato **GARANTIZADO**, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

#### 15. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro u otros seguros de cumplimiento con relación al mismo contrato **GARANTIZADO**, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivas pólizas.

#### 16. COASEGURO

En caso de existir coaseguro, esto es la distribución entre varias aseguradoras de determinado riesgo, el importe de la indemnización se distribuirá y hará exigible entre los coaseguradores, en proporción a las cuantías de sus respectivos coaseguro asumido, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada pactada.

Para constancia de lo expuesto, y en señal de asentimiento y compromiso con todo lo aquí pactado se firma en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ ( ) días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
**SUCURSAL BOGOTÁ**

CRA. 13A Nº 96-66 - TEL.: 218 09 03

\_\_\_\_\_  
**EL CONTRATISTA**  
**GARANTIZADO**

\_\_\_\_\_  
**SEGURESTADO**  
**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**



**Flor Marina Bustos Chila**

---

De: Flor Marina Bustos Chila  
Enviado el: Viernes, 09 de Diciembre de 2011 03:45 p.m.  
Para: Oscar Gustavo Acosta Manrique  
CC: Monica Olarte Gamarra  
Asunto: Contrato 147 de 2011 - IVAN DARIO GOMEZ LEE

Buenas tardes Dr. Acosta:

Con el fin de aprobar la póliza solicitada en el contrato del asunto, es importante que se corrija el objeto del contrato.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA JURÍDICA PARA ADELANTAR LA FIJACIÓN DE POLÍTICAS Y LA REGLAMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014. EN LO RELACIONADO CON EL SECTOR TRANSPORTE.

Agradezco, una vez sea corregida la misma, se envíe nuevamente al Grupo Contratos.

Cordialmente,

FLOR MARINA BUSTOS CHILA  
Abogada Grupo Contratos  
Oficina Asesora de Jurídica  
Ministerio de Transporte



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición BOGOTA, D.C.			Sucursal BOGOTA			Ced. Sucursal 11		No. Póliza 11-44-101028319		Anexo 1				
Fecha Expedición Día Mes Año 12 12 2011			Vigencia Desde Día Mes Año 02 12 2011			A las Horas 00:00		Vigencia Hasta Día Mes Año 07 10 2012			A las Horas 00:00		Tipo de Movimiento ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social GOMEZ LEE, IVAN DARIO		Identificación: 80.410.929	
Dirección: CLL 71 NO. 5-23		Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		Teléfono: 2498139	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario: MINISTERIO DE TRANSPORTE		Identificación: 899.999.005	
Dirección: BOGOTA		Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		Teléfono: 0	

OBJETO DEL SEGURO

Subjeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CJ-010A, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido. Seguros del Estado S.A. garantiza:  
EL CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATO No 147 DE 2011, REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA JURIDICA PARA ADELANTAR LA ELABORACION DE POLITICAS Y LA REGLAMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014, EN LO RELACIONADO AL SECTOR TRANSPORTE.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	02/12/2011	07/10/2012	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00

OBSERVACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL CONTRATO SE REFIERE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA JURIDICA PARA ADELANTAR LA ELABORACION DE POLITICAS Y LA REGLAMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014, EN LO RELACIONADO AL SECTOR TRANSPORTE.

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Límite de Pago
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****15,000,000.00	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
DIRECTA	4013	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 13A No 96-66 - Teléfono: 2186803 - BOGOTA, D.C.



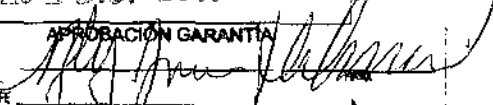
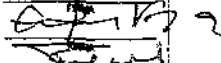
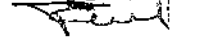
SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
SUCURSAL BOGOTA  
CRA. 13A No 96-66 - TEL: 218 09 03  
11-44-101028319

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro García Berrio - Vicepresidente de Fianzas

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Teléfono: 2186977

FIRMA TOMADOR

ELSY PERNAL

		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE		
		22 DIC. 2011		
APROBACIÓN GARANTÍA				
APROBO:				
REVISARON OAL: JEF:				
COORDINADOR(A):	CLOTILIA VARGAS 			
	Lior Marina Busto 			



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NTT. 899.999.055-4

Prosperidad  
para todos

76

MEMORANDO  
20111210224583



16-12-2011

Bogotá, D.C., 16-12-2011

PARA: Dra. ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA - Coordinadora Grupo Contratos

DE: Supervisor Contrato 147 de 2011

ASUNTO: Acta de Iniciación

Para los fines pertinentes envío a usted el Acta de Iniciación del contrato 147 de 2011, celebrado con el Dr. Iván Darío Gómez Lee, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, en lo relacionado con el sector transporte".

Cordialmente,

CÉSAR AUGUSTO PEÑALOZA PABÓN

Supervisor

Copia: Dr. César Augusto Amortegui -- Coordinador Grupo Contabilidad

Anexo: Dos (2) Folios

Proyectó: Angela M.  
Elaboró: Angela M.  
Revisó: César Peñaloza  
Fecha de elaboración: Diciembre 15 de 2011  
Número de radicado que responde: 20111210224583  
Tipo de respuesta Total( ) Parcial( )

Jox y a/lex  
22/12/11

22/12/11



Ministerio de Transporte

UNIDAD EJECUTORA \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA Oficina Asesora de Planeación

FIS 003

HOJA 1 de 2

FECHA

DIA  
12

MES  
12

AÑO  
2011

ACTA No 01

### INICIACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO No 147 DE 2011  
(Número de contrato) (Año suscripción)

LICITACION PUBLICA ☐ No DE DE  
(Indique la identificación de la licitación pública)

SELECCIÓN ABREVIADA ☐ No DE DE  
(Indique la identificación de la selección abreviada)

CONTRATACIÓN DIRECTA ☒ No DE DE  
(Indique la identificación de la contratación directa)

CONCURSO DE MERITOS ☐ No DE DE  
(Indique la identificación del concurso de méritos)

### OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Bogotá, D.C.  
(Indique en este espacio el sitio de la ejecución del contrato o proyecto)

PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO Seis (6) meses  
(Indique en este espacio la duración en días o meses para ejecutar el contrato)

VIGENCIA DEL CONTRATO \_\_\_\_\_  
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 DE DICIEMBRE DE 2011  
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 11 DE JUNIO DE 2012  
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL CONTRATO \$ 75.000.000, incluido IVA  
(Indique el valor en números del contrato suscrito en números)

### GARANTÍAS

AMPARO	No POLIZA O SU EQUIVALENTE (decreto 4828/2008)	VIGENCIA	CIA ASEGURADORA O SU EQUIVALENTE (decreto 4828/2008)
Cumplimiento del contrato de prestación de servicios	11-44-101028319	Desde 02/12/2011 Hasta 07/10/2012	SEGUROS DEL ESTADO S.A.





Ministerio de Transporte

UNIDAD EJECUTORA

DEPENDENCIA Oficina Asesora de Planeación

FIS 003

HOJA 2 de 2

FECHA

DIA  
12

MES  
12

AÑO  
2011

CONTRATISTA IVAN DARIO GÓMEZ LEE C.C. No. 80.410.929

(Escriba No de NIT y/o Cédula, nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

(Escriba No de NIT y/o Cédula, nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR CÉSAR PEÑALOZA PABÓN C.C. No. 79.795.148

(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato de interventoría)

En Bogotá a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2011

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números)

(Indique el mes en el cual se efectúa la reunión)

(Año)

se reunieron IVAN DARIO GÓMEZ LEE, Contratista, y CÉSAR PEÑALOZA PABÓN, Supervisor,

(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

(Nombre de representante legal o delegado de la firma interventoría)

con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.

La Supervisión hace constar que constató la hoja de vida y la tarjeta profesional vigente No 66498 del Consejo Superior de la

(Nombre)

Judicatura, del abogado Dario Gómez Lee

En consecuencia, se procede a dar inicio a la ejecución del contrato, el cual debe concluir el día

Once (11)

(Día en letras y número)

del mes de Junio del año 2012

(Mes en que se firma el acta)

(Año)

(Firma)

(Nombre) Ivan Dario Gómez Lee  
Contratista

(Firma)

(Nombre)

César Augusto Peñaloza Pabón  
Supervisor

Original: Oficina Jurídica

Copia: Unidad Ejecutiva

Copia: Supervisor

Copia: Contratista



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NTT 899.999.055-4

Prosperidad  
para todos

79

MEMORANDO

20121210014323



31-01-2012

Bogotá.D.C., 31-01-2012

PARA: Dr. César Augusto Amortegui F. - Coordinador Grupo de Contabilidad

DE: Supervisor Contrato 147 de 2011

ASUNTO: Contrato 147 de 2011

Para su información y fines pertinentes me permito remitir la factura y demás soportes del Contrato 147 de 2011, a nombre de Iván Darío Gómez Lee, del período comprendido entre el 12 de diciembre de 2011 y el 11 de enero de 2012 y cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte".

Anexo:

- Acta No. 02 de Recibo Parcial
- Factura
- Planilla de Aportes a salud y pensión
- Declaración Juramentada de aportes
- Informe Parcial

Cordialmente,

**OSCAR GUSTAVO ACOSTA MANRIQUE**

Supervisor


CC. Isabel Cristina Vargas Sinisterra - Coordinadora Contratos

Anexo: Veintidós (22) Folios

Proyectó: Angela M.  
Elaboró: Angela M.  
Revisó: Oscar Acosta  
Fecha de elaboración: Enero 30 de 2012  
Número de radicado que responde: 20121210014323  
Tipo de respuesta Total( ) Parcial( )

JOSE  
01/02/2012  
07 FEB 2012

80

	UNIDAD EJECUTORA	FIS - 018	
	DEPENDENCIA	HOJA 1 de 2	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA	
		12	1 2012

**ACTA No. 02**  
**RECIBO PARCIAL DE PRESTACION DE SERVICIOS**  
**CORRESPONDIENTES AL MES : 12 DE DICIEMBRE DE 2011 A 11 DE ENERO DE 2012**

**CONTRATO No** 147 **DE** 2011  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CDNTRATO**  
 Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte

**CDNTRATISTA** IVAN DARIO GÓMEZ LEE C.C. No. 80.410.929  
(Escriba No en Nil y/o Cédula, nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR y/o SUPERVISOR** CESAR PEÑALOZA PABÓN C.C. No. 79.795.148  
(Escriba No en Nil y/o Cédula, nombre o razón social del interventor y/o supervisor)

**PLAZO INICIAL DEL CDNTRATO** Seis (6) meses

**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO** \_\_\_\_\_

**VALOR INICIAL** \$ 75.000.000, incluido IVA

**VALOR ADICIONAL** \_\_\_\_\_


**VALDR TOTAL** \$ 75.000.000, incluido IVA

**PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO** Seis (6) meses  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**GARANTIAS**

AMPARO	No POLIZA O SU EQUIVALENTE (decreto 4628/2008)	VIGENCIA	CIA ASEGURADORA o SU EQUIVALENTE (decreto 4628/2008)
Cumplimiento del contrato de prestación de servicios	11-44-101028319	Desde 02/12/2011 Hasta 07/10/2012	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

En Bogotá, a los doce ( 12 ) días del mes de enero de 2012, se reunieron IVAN DARIO GÓMEZ LEE, contratista, y CESAR PEÑALOZA PABÓN, Supervisor para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo de los trabajos ejecutados por el contratista

	UNIDAD EJECUTORA	FIS - 018	
	DEPENDENCIA	HOJA 1 de 2	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA	
		12	1 2012

**TRABAJOS REALIZADOS Y ENTREGADOS**

DESCRIPCION	CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
INFORME	1	ESCRITO	12.500.000,00	12.500.000,00	ANEXO

VALOR TRABAJOS REALIZADOS	10.775.862,00
IVA (      %)	1.724.138,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	12.500.000,00

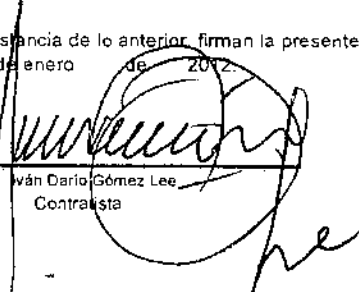
  

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA: OOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS


% EJECUTADO DE RECURSOS A LA FECHA 17 % DE AVANCE FISICO 17%

NOTA: El recibo por parte de la interventoría y/o supervisor de los trabajos ejecutados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial los que en ella intervinieron a los doce días del mes de enero de 2012.

(Firma) 

(Nombre) Iván Darío Gómez Lee  
Contratista

(Firma) 

(Nombre) César Peñafoza Pabón  
Supervisor

Original: Oficina Jurídica  
 Copia: Interventor y Supervisor  
 Copia: Contratista  
 Copia: Unidad Ejecutora

**IVAN DARIO GÓMEZ LEE**

Abogado Experto en Contratación y Control  
Carrera 13 No. 96-67 Of. 503 Tel: 805 2019 Bogotá, D.C.

NIT. 80410929-7 Régimen Común  
Resolución DIAN 320000814426 de  
Fecha 16/08/2011 Numeración  
Autorizada IG 01 al IG 1000

**FACTURA DE VENTA**

**No. IG 0061**

FECHA: 12 de enero de 2012

SEÑORES: Ministerio de Transporte

DIRECCIÓN: Ayda. El Dorado C.A.P.

TELÉFONO: 3240800 NIT/C.C. 899.999.055-4

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Primer pago contrato de Prestación de servicios D. 147 de 2011		12.500.000

La firma puesta por terceros en representación mandante u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del C. de C. si igualmente constancia de la entrega real y material de la mercadería y/o prestación del servicio.

SON: Doce millones quinientos mil pesos M/cte

SUBTOTAL \$	10.775.862
IVA	1.724.138
TOTAL \$	12.500.000

IVAN DARIO GÓMEZ LEE

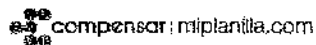
FIRMA RECIBIDO NIT/CC.

Datos ▾	Empleados ▾	Planillas ▾	Documentos ▾	Reportes ▾	Transar	Costantías	Chat	Salir
---------	-------------	-------------	--------------	------------	---------	------------	------	-------

Periodo Pensión: Enero 2012. Periodo Salud: Enero 2012. Enero 17 de 2012 / 11:35 AM

[Inicio](#) • [Planillas](#) • Pagos por Administradora

## Planillas / Pagos por Administradora



Razón Social Recaudó	Compensar OJ
NIT Recaudó	9998600669427
Descripción	MiPlanilla.com Pago Protección Social
Fecha de Pago	1/6/2012
Periodo Cotización Salud	1/2012
Empresa	Ivan Dario Gomez Leo
Nit	80410929
Número de Radicación	8304987614
CUS Código único de seguimiento de la transacción:	1000000210
Número de Administradoras	2
Número de Empleados	1
Total Pagado	\$4,358,300.00
Medio de Pago	Pago en Cajas
Banco	Banco de bogota
Estado de la Transacción:	Transacción Aprobada

Código	NIT	Nombre	Número de incapacidad(es) y/o licencia (s) de incapacidad	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado	No. Afiliados
Z31001	800227840	Carfondas		\$0.00	\$2,419,100.00	1
EPS005	800251440	Sanitas EPS		\$0.00	\$1,940,200.00	4

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#)

[Exportar reporte a PDF](#)

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2012 Compensar - Conrol S.A.



Powered by



Acuerdo de los certificados SSL



Certificado # 5150-1

MiPlanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

82

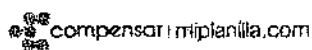
Datos Empleados Planillas Documentos Reportes Transar Cesantías Chat Salir

Periodo Pensión: Enero 2012. Periodo Salud: Enero 2012.

Enero 17 de 2012 / 11:34 AM

Inicio Planillas Pagos por Administradora

## Planillas / Pagos por Administradora



Razón Social Recaudó	Compensar OI
NIT Recaudó	9998600669427
Descripción	MiPlanilla.com Pago Protección Social
Fecha de Pago	12/13/2011
Periodo Cotización Salud	12/2011
Empresa	Ivan Dario Gomez Lee
Nit	80410929
Número de Radicación	8301807062
CUS Código único de seguimiento de la transacción:	2830300191
Número de Administradoras	2
Número de Empleados	1
Total Pagado	\$4,376,581.00
Medio de Pago	Pago en Cajas
Banco	Banco Colpatria
Estado de la Transacción:	Transacción Aprobada

Código	NIT	Nombre	Número de incapacidades y/o licencia (s) de incapacidad	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado	No. Afiliados
231001	803227940	Colfondos		\$0.00	\$2,420,226.00	1
EPS005	800261440	Sanitas EPS		\$0.00	\$1,956,355.00	4

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Le informamos que el pago de la planilla No. 8301807062, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté aliando a la mora, ya que la Ley establece la obligación de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2012, Compensar - Cemit S.A.







83

Bogotá D.C., 11 de enero de 2012


Señores

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**


Respetados señores,

Para los fines establecidos en el artículo 4º del Decreto 2271 de 2009 y el Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento, que el documento soporte del pago de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a la totalidad de mis ingresos. Por lo tanto no estoy en la obligación de cotizar un valor superior.

Cordialmente,



**IVAN DARIO GOMEZ LEE**  
C.C. 80. 410.929 de Bogotá D.C.



Iván Darío Gómez Lee

## INFORME DE LABORES

### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 147 de 2011

**CONTRATO No:** 147 de 2011  
**CONTRATISTA:** Iván Darío Gómez Lee  
**PERÍODO:** 12 de diciembre de 2011 a 11 de enero de 2012  
**SUPERVISOR:** Doctor Cesar Augusto Peñaloza

#### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en lo relacionado con el sector transporte.

#### OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

1. Constituyen derechos y deberes del **CONTRATISTA**, para efectos del presente contrato los contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
2. El contratista se obliga al cumplimiento oportuno de todas las normas laborales legales y convencionales vigentes.
3. El contratista deberá cumplir con el desarrollo de las siguientes actividades:
  - a. Preparación de los Proyectos de actos administrativos requeridos para reglamentar lo relativo a la expropiación, redes de servicios públicos y sistemas inteligentes de transporte de la Ley 1450 de 2011, y los demás que sean requeridos por el supervisor del contrato.
  - b. Asistir a las mesas de trabajo que fijen las posiciones institucionales o sectoriales y proyectar las actuaciones que se requieran, revisar jurídica e institucionalmente las propuestas de este grupo.
  - c. Preparar la reglamentación que solicite el señor Ministro de Transporte y participar en las reuniones de análisis y mejoramiento de los mismos.
  - d. En cumplimiento del objeto contractual, ejecutará las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.

Iván Darío Gómez Lee 

- e. Rendir informes mensuales por escrito al supervisor del contrato sobre las actividades adelantadas y de su gestión

**LABORES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:**

Por medio del presente hago entrega del primer informe de actividades contractuales de acuerdo con el contrato N° 147 de 2011 suscrito con el Ministerio de Transporte. Este informe está compuesto por las obligaciones del mencionado contrato, una lista de actividades específicas y generales realizadas, la factura y los anexos respectivos. La relación de actividades es la siguiente:

Se realizó estudio jurídico referenciado en un marco conceptual sobre expropiación y traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte, que será el referente de una de nuestras tareas a desarrollar, con el fin y en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, se expida un decreto con el fin de asegurar la ejecución de las disposiciones mencionadas en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte y traslado de redes de servicios públicos domiciliarios en proyectos de la misma naturaleza.

Se realizó la primera propuesta del articulado del decreto mediante el cual se reglamentaran la expropiación y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte

Se llevo a cabo reunión con el equipo del Ministerio de Transporte los días 23 y 26 de diciembre de 2011, en la cual fueron fijados los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte.

Se realizó la segunda propuesta del articulado del decreto mediante el cual se reglamentaran la expropiación y el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC en proyectos de infraestructura de transporte, luego de las reuniones llevadas a cabo en su despacho con el equipo del Ministerio los días 23 y 26 de diciembre del 2011.

Se realizó reseña de actividades a desarrollar para el 2012 al marco del presente contrato.

APROBADO POR EL SEÑOR  
IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE  
IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE 36

Así mismo, según correo que nos remitió el 11 de enero de 2012 la Viceministra María Constanza García, haremos parte también del grupo que se hará cargo de la reglamentación de la Ley APP, Acuerdos de Iniciativa Público Privada.

Por último en el curso del presente mes entregaré un escrito alusivo al tema de contratos APP, sus implicaciones y escenarios de reglamentación.

## **ANEXOS**

Anexo 1:

- Documento con los respectivos soportes, del presente informe.

Anexo 2:

- Factura N°61 por valor de \$12.500.000

Anexo 3:

- Formato pago de seguridad social

Cordialmente,



**IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE**  
C.C. 80.410.929 de Bogotá.

## **ANEXOS:**

### **1. MARCO CONCEPTUAL**

La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 58 señala: "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa -administrativa, incluso respecto del precio. (Negritillas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, la Constitución impone al ejercicio de la propiedad privada exigencias relativas a las funciones social y ecológica de la propiedad y, en cuanto a la terminación del derecho, prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación por vía judicial y por vía administrativa cuando motivos de utilidad pública o interés social lo exijan siempre que haya una indemnización.

Por expropiación se entiende la "desposesión que realiza el Estado de un derecho real de propiedad por motivo de utilidad pública a cambio de una indemnización".

Antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, la Carta anterior consagraba la expropiación, con un alcance menor, bajo su vigencia se expidieron no sólo las actuales normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el proceso de expropiación, sino también las Leyes 56 de 1981 y 9ª de 1989, con posterioridad fueron expedidas la Leyes 388 de 1997, 1152 de 2007.

En virtud de la Ley 56 de 1981, se reguló la expropiación de zonas para planes de energía eléctrica o acueducto.

La Ley 9ª de 1989, autorizó la compraventa y expropiación de bienes inmuebles urbanos y suburbanos para destinarlos a la ejecución de planes de desarrollo, de vivienda de interés social, de preservación del patrimonio cultural, incluidos el

histórico y el arquitectónico en zonas urbanas y rurales, la constitución de zonas de reserva para la protección del ambiente y de los recursos hídricos; para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los campos de la salud, educación, turismo, recreación deporte, ornato y seguridad y la ejecución de proyectos de ampliación; desarrollo de sistemas de transporte masivo de pasajeros; para el funcionamiento de las sedes administrativas de la nación, de las entidades territoriales, áreas metropolitanas y asociaciones de municipios y los establecimientos públicos; para la ejecución de obras públicas; provisión de espacios públicos urbanos; programas de almacenamiento, procesamiento y distribución de bienes de consumo básico; legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales; reubicación de asentamientos urbanos humanos ubicados en sectores de alto riesgo y rehabilitación de inquilinatos; ejecución de proyectos de urbanización o construcción prioritarios en los planes de desarrollo, proyectos de integración o readaptación de tierras.

El Acto Legislativo 1º de 1999, reformó el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, al suprimir el inciso final que había consagrado la expropiación por equidad. Con esta figura se pretendía decretar la expropiación sin indemnización, por razones de equidad, mediante votación de la mayoría absoluta de los miembros de una Cámara y otra Cámara. A pesar de que el inciso tuvo vigencia durante ocho años, no hubo un solo caso en que se autorizara y ejecutara esta forma de expropiación.

La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en general se han mantenido uniformes al afirmar que en Colombia es posible expropiar la propiedad siempre que se reúnan los requisitos señalados en el artículo 58 de la Constitución Política, esto es, que se definan claramente los motivos de utilidad pública o interés social, que haya un pago previo de la indemnización correspondiente y, si no es posible concluir satisfactoriamente una negociación directa, que haya una sentencia judicial de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción contencioso administrativa, según el caso.

De acuerdo con el H. Consejo de Estado, la expropiación constituye un límite al derecho de propiedad consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política, razón por la cual la connotación liberal y absoluta de este derecho, ha sido superada y como consecuencia, su comprensión admite restricciones. Lo anterior teniendo en cuenta la función social y el interés general que enmarcan el derecho de propiedad en un Estado Social de Derecho como el colombiano.

El artículo 58 de la Constitución Política, establece dos clases de expropiación la judicial y la administrativa las cuales deben ceñirse a que: "i) Existan motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador. ii) Que exista decisión

judicial o administrativa, esta última sujeta a posterior acción contencioso administrativa incluso respecto del precio.”.

La expropiación judicial, goza, entre otras, de las siguientes características: “Es la regla general, y se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, sea porque el propietario se niegue a negociar, o porque guarde silencio, o porque no cumpla con el negocio (Artículo 20 Ley 9ª de 1989). Se lleva a cabo por medio de una resolución que admite recurso de reposición. En firme esta resolución, la Administración demanda ante la jurisdicción civil al propietario para que entregue el inmueble, por medio del proceso especial de expropiación, contenido en la Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997 y Código de Procedimiento Civil.”.

Por su parte, la expropiación administrativa, tiene las siguientes características: “También se presenta luego de fracasada la negociación entre la Administración y el propietario, pero es excepcional en la medida que es necesario que se configure una emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia para adquirir el predio mediante el trámite de expropiación administrativa, es decir, solo procederá cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos expresamente en la ley (artículo 63 Ley 388 de 1997), previa declaratoria de urgencia cuyas causales también están expresamente delimitadas en la Ley (artículo 65, ibídem) (...) La declaración de las condiciones de urgencia, que autorizan la expropiación por vía administrativa será realizada por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante Acuerdo. Esta instancia tendrá la competencia general para todos los eventos, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 388 de 1997. En ese orden de ideas, considera el Alto Tribunal Administrativo, “(...) [Q]ue ante el fracaso de la etapa de enajenación voluntaria y la falta de condiciones de urgencia manifiesta, la Administración tiene la competencia para iniciar por vía judicial la expropiación, previa resolución que se notifica conforme a los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo, por mandato expreso del artículo 62 de la Ley 388 de 1997.”.

De conformidad con lo anterior, en la etapa de negociación voluntaria la administración no está efectuando ningún tipo de actividad administrativa que pueda perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en que se presentan la negociación es voluntaria. Por lo tanto el acto por medio del cual se hace una oferta al propietario del bien inmueble que puede ser objeto de expropiación administrativa o judicial dependiendo de las circunstancias ya reseñadas, no genera un perjuicio alguno para el actor.

Por otra parte, la H. Corte Constitucional, ha señalado que el derecho moderno reconoce a la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado de la evolución de principios de orden filosófico y político que han influido en el proceso de su consolidación jurídica, los cuales han contribuido a limitar en buena medida los atributos o poderes exorbitantes reconocidos a los propietarios por el derecho romano.

En relación con la expropiación el Alto Tribunal Constitucional dijo: "La expropiación constituye un medio o instrumento del cual dispone el Estado para incorporar al dominio público los bienes de los particulares, previo el pago de una indemnización, cuando éstos se requieran para atender o satisfacer necesidades de utilidad pública e interés social, reconocidas o definidas por la ley con intervención de la autoridad judicial (expropiación judicial) o mediante la utilización de los poderes públicos expropiatorios del régimen administrativo (expropiación administrativa). También se le ha dado sustento a la expropiación con fundamento en la función social de la propiedad cuando se la utiliza con fines de redistribución de la propiedad o para conminar a los propietarios a explotar las tierras en forma eficiente o con arreglo a programas de producción diseñados por el Estado."

De acuerdo con la H. Corte Constitucional, la figura de la expropiación comporta una limitación al derecho de propiedad el cual no se anula con tal figura, "(...) simplemente a través de ésta se pone en vigencia y se hace operativo y realizador el principio de la prevalencia del interés público o social sobre el interés particular; la indemnización que se reconoce al propietario expropiado compensa o subroga el derecho del cual ha sido privado, su derecho de propiedad se transforma en un derecho de crédito frente a la entidad pública expropiante, por el valor de la indemnización. Adicionalmente, según esa corporación "[c]orresponde al legislador, siguiendo la filosofía del texto constitucional determinar: el sujeto expropiante y los límites de su competencia, los sujetos pasivos de la expropiación, la definición de los motivos de utilidad pública e interés social que justifican la expropiación, la regulación del monto de la indemnización y la forma de pago, así como el procedimiento administrativo y judicial requerido para llevar a cabo la expropiación."

En el marco de lo expuesto el legislador expidió el Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1450 de 2011, la cual en su artículo 83 dispuso: "Para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de transporte diseñado será el siguiente: 1. La entidad responsable expedirá una resolución mediante la cual determine de forma precisa las coordenadas del



Iván Darío Gómez Lee

proyecto. 2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC o la entidad competente según el caso, en los dos (2) meses siguientes a la publicación de la resolución de que trata el numeral anterior, procederá a identificar los predios que se ven afectados por el proyecto y ordenará registrar la calidad de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria, quedando dichos predios fuera del comercio a partir del mencionado registro. 3. Efectuado el Registro de que trata el numeral anterior, en un término de seis (6) meses el IGAC o la entidad competente, con cargo a recursos de la entidad responsable del proyecto, realizará el avalúo comercial del inmueble y lo notificará a esta y al propietario y demás interesados acreditados. 4. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor de las posesiones si las hubiera y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar, por afectar dicha declaratoria el patrimonio de los particulares. 5. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para determinar el valor del precio de adquisición o precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios en los procesos de enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa, teniendo en cuenta la localización, las condiciones físicas y jurídicas y la destinación económica de los inmuebles. 6. Los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley en los términos del Código Contencioso Administrativo contra el avalúo del IGAC o de la entidad competente. 7. En firme el avalúo, la entidad responsable del proyecto o el contratista si así se hubiere pactado, pagará dentro de los tres (3) meses siguientes, las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar. Al recibir el pago el particular, se entiende que existe mutuo acuerdo en la negociación y transacción de posibles indemnizaciones futuras. 8. Efectuado el pago por mutuo acuerdo, se procederá a realizar el registro del predio a nombre del responsable del proyecto ratificando la naturaleza de bien como de uso público e interés social, el cual gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. 9. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensación, se expedirá un acto administrativo de expropiación por parte de la entidad responsable del proyecto y se realizará el pago por consignación a órdenes del Juez o Tribunal Contencioso Administrativo competente, acto con el cual quedará cancelada la obligación. 10. La resolución de expropiación será el título con fundamento en el cual se procederá al registro del predio a nombre de la entidad responsable del proyecto y que, como bien de uso público e interés social, gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las personas objeto de indemnización o compensación a recurrir ante los Jueces Contencioso Administrativos el valor de las mismas en cada caso particular. 11. La entidad responsable del proyecto deberá notificar a las personas objeto de la indemnización o compensación, que el pago de la misma se realizó. Una vez efectuada la notificación, dichos sujetos deberán entregar el inmueble dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 12. En el evento en que las personas objeto

de indemnización o compensación no entreguen el inmueble dentro del término señalado, la entidad responsable del proyecto y las autoridades locales competentes deberán efectuar el desalojo dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para entrega del inmueble. Parágrafo 1°. El presente artículo también será aplicable para proyectos de infraestructura de transporte que estén contratados o en ejecución al momento de expedición de la presente ley. Parágrafo 2°. El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa.”. (Negrillas fuera de Texto).

Por su parte la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en el parágrafo 1° del artículo 87, norma a través de la cual se modifica el numeral 12 de la Ley 80 de 1993, reprodujo literalmente el contenido del artículo 83 de la Ley 1450 de 2011.

Ahora bien, por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo –Ley 1450 de 2011, en relación con el traslado de redes de servicios públicos en proyectos de infraestructura de transporte, dispuso en su artículo 97: “Para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, en los cuales se requiera el traslado o reubicación de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC, instaladas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1228 de 2008, el Gobierno Nacional definirá un esquema de responsabilidades intersectoriales que permita articular el desarrollo de las inversiones en los diferentes sectores. Esta reglamentación estará orientada bajo los principios de equidad, eficiencia económica, celeridad, suficiencia financiera, prevalencia del interés colectivo y neutralidad, evitando que se generen traslado de rentas de un sector al otro. El esquema a desarrollar podrá considerar entre otros, criterios como la vida útil de las redes a ser trasladadas, el estado de las mismas, sus necesidades de reposición o modernización. Bajo este marco, las Comisiones de Regulación de los servicios públicos domiciliarios incorporarán en la regulación las medidas necesarias para cumplir con dicho esquema.”. (Negrillas fuera de Texto).

De conformidad con lo anterior, teniendo en cuenta el mandato del legislador sobre la reglamentación que debe hacer el gobierno nacional de las normas del Plan Nacional de Desarrollo antes mencionadas, éste a través del Ministerio de Transporte, el cual hace parte de la rama ejecutiva del poder público y conforma junto con los demás ministerios, los departamentos administrativos y las

superintendencias el sector descentralizado de la administración pública nacional, en cumplimiento de una de sus funciones como lo es la de "[p]reparar proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa (...)", y en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, debe expedir un decreto con el fin de asegurar la ejecución de las disposiciones mencionadas en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte y traslado de redes de servicios públicos domiciliarios en proyectos de la misma naturaleza.

Por último cabe señalar que el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 consagró el procedimiento que deben seguir las entidades del orden nacional para la creación de cualquier trámite que afecte a los ciudadanos. Adicionalmente confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República con el fin de que éste expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes al interior de la administración pública.

En el marco de lo expuesto, me permito presentar el texto del decreto reglamentario de las normas del Plan Nacional de Desarrollo antes mencionadas.

## **2. PROPUESTA DE ARTICULADO 1.0**

### **Decreto**

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1 del artículo 75 de la ley 1474 de 2011,

### **DECRETA**

Artículo 1. Procedimiento especial de adquisición de inmuebles para proyectos de infraestructura. Adóptese como procedimiento especial de simplificación de trámites, los procedimientos, parámetros y criterios para la declaratoria de interés y adquisición de inmuebles para los proyectos de infraestructura, contenidas en los parágrafos 1 y 2 del Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011.

Para efectos de su oportuna y eficaz aplicación se complementa con las disposiciones del presente decreto.

Artículo 2. Competencia especial. El Ministro de Transporte y los Jefes de las entidades adscritas y vinculadas a éste sector, podrán asumir la facultad que confiere el parágrafo 1 y 2 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de lo cual la orden de registrar la calidad de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria, se llevará a cabo en aquellos casos en los que por importancia estratégica de un bien inmueble lo amerite.

Artículo 3. Descongestión en materia de avalúos. En relación con el avalúo comercial, previsto en el numeral tercero del parágrafo 1 artículo 87 de la ley 1474 de 2011, facultase a las entidades para contratar el mismo mediante profesionales especializados, por contratos de prestación de servicios de manera unipersonal o colegiada.

Artículo 4. Criterios para la indemnización. Respecto de los criterios previstos en el numeral quinto del parágrafo 1 artículo 87 de la ley 1474 de 2011, se faculta a las entidades a indemnizar el daño emergente y el lucro cesante.

En desarrollo de lo anterior en el respectivo avalúo se podrán reconocer en el precio indemnizatorio gastos que ocasionan un daño emergente como los gastos para adquisición de predios equivalentes, o los gastos de traslado o transporte que se generen por la entrega del inmueble, siempre que se acredite prueba sumaria de tales gastos.

Para proteger los derechos de población vulnerable, así como para el caso de los inmuebles destinados a vivienda familiar, la indemnización debe ser de carácter compensatoria.

Artículo 5. Inmuebles de entidades públicas. Cuando el inmueble que se requiere adquirir sea de propiedad de una entidad pública, la entrega se debe hacer de manera inmediata. La entidad ejecutora del proyecto, ordenará la realización del avalúo comercial y se apropiarán los recursos para la vigencia fiscal siguiente. Se podrá acordar la entrega gratuita de los bienes entre entidades de la administración pública.

Artículo 6. Traslado de redes de servicios públicos y continuidad del servicio. Para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, las entidades públicas que desarrollen tales proyectos podrán contratar el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y contratar empresas o firmas que garanticen la continuidad del servicio, mediante procedimientos de selección abreviada de menor cuantía hoy vigentes o procedimientos especiales que autoriza la Ley 1437 de 2011. La

empresa que usa las redes podrá participar como oferente y ser contratada para el traslado de las redes o la prestación del servicio.

Para garantizar los derechos de las empresas que estén prestando los servicios públicos que se requiera trasladara, facultase a las entidades para contratar profesionales especializados, por contratos de prestación de servicios de manera unipersonal o colegiada estimen los perjuicios que se reconocerán, contra el acto administrativo que acoge este informe procede recurso de reposición y las acciones contencioso administrativas previstas en las leyes.

Por su carácter de proyectos de utilidad pública a que se refieren los parágrafos 1 y 2 del Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 las actuaciones de ejecución contractual tendrán efecto inmediato y la ejecución del contrato de traslado de redes y de continuidad en el servicio no estarán condicionados a ninguna otra actuación.

### **3. PROPUESTA DE ARTICULADO 2.0**

Decreto

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1 del artículo 75 de la ley 1474 de 2011,

DECRETA

Artículo 1. Procedimiento especial de adquisición de inmuebles para proyectos de infraestructura. Adóptese como procedimiento especial de simplificación de trámites y de mayor eficiencia para la administración pública, los procedimientos, parámetros y disposiciones del presente decreto, aplicable a las entidades responsables de adelantar un proyecto de infraestructura de transporte:

1. Al asumir la facultad que confieren los parágrafos 1 y 2 de la Ley 1474 de 2011, podrán ordenar directamente el registro de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria.

2. En relación con el avalúo comercial previsto en el numeral tercero del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, facúltase a las entidades para contratar el servicio de elaboración de avalúos con una Lonja de Propiedad Raíz, la cual designará para el efecto a un perito evaluador que se encuentre registrado y autorizado por ella. En el evento que el avalúo supere el equivalente en pesos a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.L.V.), se

deberá realizar un estudio complementarios con profesionales especializados de la misma entidad pública o contratados por ésta mediante prestación de servicios de manera unipersonal o colegiada. En los contratos donde la gestión predial se encuentre delegada, será aplicable esta disposición y la entidad pública realizará o contratará el estudio complementario.

Contra el avalúo solo procede el recurso de reposición contra la entidad o persona que produce el mismo.

3. Cuando el área del inmueble que se requiere adquirir sea de propiedad de una entidad pública, la entrega se dispondrá de manera inmediata, si el predio no está afecto a un servicio o una función pública que este prestando en esa área. La entidad ejecutora del proyecto, ordenará la realización del avalúo comercial y se apropiarán los recursos para la vigencia fiscal que corresponda. Se podrá acordar la entrega gratuita de los bienes entre entidades de la administración pública o el intercambio de bienes de valores diferenciales.

Parágrafo. Para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, las entidades públicas que desarrollen tales proyectos podrán contratar el traslado de redes de servicios públicos domiciliarios y contratar empresas o firmas que garanticen la continuidad del servicio, mediante procedimientos de selección abreviada de menor cuantía hoy vigentes o procedimientos especiales que autoriza la Ley 1437 de 2011. La empresa que usa las redes podrá participar como oferente y ser contratada para el traslado de las redes o la prestación del servicio. Para garantizar los derechos de las empresas que estén prestando los servicios públicos que se requiera trasladar, facultase a las entidades para contratar profesionales especializados, por contratos de prestación de servicios de manera unipersonal o colegiada estimen los perjuicios que se reconocerán, contra el acto administrativo que acoge este informe procede recurso de reposición y las acciones contencioso administrativas previstas en las leyes. Por su carácter de proyectos de utilidad pública a que se refieren los parágrafos 1 y 2 del Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 las actuaciones de ejecución contractual tendrán efecto inmediato y la ejecución del contrato de traslado de redes y de continuidad en el servicio no estarán condicionados a ninguna otra actuación.

#### **4. RESEÑA DE ACTIVIDADES 2012**

En el marco de lo expuesto hemos cumplido con las tareas de asesoría para el 2011.

Iván Darío Gómez Lee 97

Para el 2012 según el correo electrónico enviado el 10 de enero de 2012, haré parte de las mesas de trabajo que se celebran con el IGAC y Camilo Ospina en el marco de la reglamentación del Plan de Desarrollo.

Así mismo, según correo que nos remitió el 11 de enero de 2012 la Viceministra María Constanza García, haremos parte también del grupo que se hará cargo de la reglamentación de la Ley APP, Acuerdos de Iniciativa Público Privada.

Por último en el curso del presente mes entregaré un escrito alusivo al tema de contratos APP, sus implicaciones y escenarios de reglamentación.



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NIT. 899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Oficina Jurídica - Grupo de Contratos  
92

MEMORANDO

2012-220012673

MEMORANDO DE OFICIO

27-01-2012

Bogotá D.C., 27-01-2012

PARA: Dra. ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA - Coordinadora Grupo Contratos

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

ASUNTO: Cambio Supervisor

Para los fines pertinentes y teniendo en cuenta que mediante Resolución anexa fui encargado de las funciones de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de manera atenta me permito informarle que a partir de esta fecha asumiré la supervisión de los contratos 147 y 151 de 2011, mientras dura el encargo.

Cordialmente,

OSCAR ACOSTA MANRIQUE

Copia: Dr. César Augusto Amortegui -- Coordinador Grupo Contabilidad

Jose  
01/02/12

01/02/2012





PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
004	3-8	2012-01-31	0,00	8,00	NINGUNO	
MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF					
004	3-8	2012-01-25	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO	
MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF					
004	3-8	2012-02-17	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO	
MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF					
004	3-8	2012-03-29	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO	
MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF					
004	3-8	2012-04-25	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO	
MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF					
004	3-8	2012-05-24	12.500.000,00	12.500.000,00	NINGUNO	
MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

100

# EXTRACTO ÚNICO DE PUBLICACIÓN



Libertad y Orden

## I. CLASE DE CONTRATO

PRINCIPAL No 147/11  
FECHA DE FIRMA 02/12/2011

## II. PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE Ministerio de Transporte NIT 899.999.055-4  
DIRECCIÓN Avenida El Dorado CAN Bogotá D.C.  
TELÉFONO 3240600E1363 E-MAIL  
DEPARTAMENTO BDGOTA D.C CIUDAD BOGOTA  
ORDEN Nacional  
CONTRATISTA IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE  
IDENTIFICACIÓN C.C 80.410.929  
DIRECCIÓN Avenida El Dorado N° 46-20  
ORDEN Distrital

## III. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

CONTRATO REGIDO POR LA NORMATIVIDAD SICE N  
CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS S  
CUANTÍA DEL CONTRATANTE \$348.140.000,00

IV. LUGARES	DE FIRMA DEL CONTRATO		DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
	Departamento	Municipio	Departamento	Municipio
	CUNDINAMARCA	Bogotá	CUNDINAMARCA	Bogotá
V. TIPO	DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS	
	BIEN O SERVICIO		S	
	MODALIDAD		Directa	
VI. VALOR	DEL CONTRATO		\$75.000.000,00	
	MONEDA DE PAGO		Pesos Colombianos	
	MONEDA DE REFERENCIA		Pesos Colombianos	

## VII. RECIBO DE PUBLICACIÓN

Nº DE RECIBO	ENTIDAD RECAUDADORA	FECHA DE PAGO	VALOR
0526913	Davivienda	06/12/2011	\$754.600

## VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO

EXPRESADO Nº DÍAS	180	TIPO DE PLAZO	Determinado
TIPO DE DÍAS	Calendario		

## X. OBJETO

# EXTRACTO ÚNICO DE PUBLICACIÓN



Libertad y Orden

## I. CLASE DE CONTRATO

PRINCIPAL No 147/11  
FECHA DE FIRMA 02/12/2011

Prestación de servicios profesionales para la formulación de una preposición jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el Sector Transporte.

## XI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Clausula Sexta - Obligaciones del Contratista: En desarrollo del objeto del presente contrato el Contratista contrae las siguientes obligaciones:  
1) Constituyen derechos y deberes del Contratista para efectos del presente contrato los contenidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 2) El contratista se obliga al cumplimiento oportuno (...)  
Plazo de ejecución: Seis (6) meses

## XII. VALORES UNITARIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	IVA APLICADO %	Nº CERTIFICADO
443	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULACIÓN DE PROPUESTA JURÍDICA DE FIJACIÓN DE POLÍTICAS Y REGLAMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO	unidad	6	\$ 2.500.000,00	16,00	

## XIV. INTERVENTOR

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CÉSAR PEÑALOZA PABÓN	C.C. 78.785.148

## XV. ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Alejandro Maye Martínez	C.C. 75.067.996

## XVI. CONTRATO PRINCIPAL

Firma

*Cesar Penaloza Pabon*



Ministerio de Transporte  
República de Colombia  
NIT: 899.999.055-4

Prosperidad  
para todos

102

MEMORANDO

20121210051603



26-03-2012

Bogotá.D.C., 26-03-2012

PARA: Dr. César Augusto Amortegui F. - Coordinador Grupo de Contabilidad

DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: Contrato 147 de 2011

Para su información y fines pertinentes me permito remitir la factura y demás soportes del Contrato 147 de 2011, a nombre de Iván Darío Gómez Lee, del período comprendido entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de febrero de 2012 y cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte".

Anexo:

- Acta No. 03 de Recibo Parcial
- Factura
- Planilla de Aportes a salud y pensión
- Declaración Juramentada de aportes
- Informe Parcial

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO POR:  
Wilde Alexander Coronado M.  
**WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO**

Jose  
02/04/12


CC. Isabel Cristina Vargas Sinisterra - Coordinadora Contratos

Anexo: Sesenta y cuatro (64) Folios

Proyectó: Angela M  
Elaboró: Angela M  
Revisó: Oscar Acosta  
Fecha de elaboración: Marzo 26 de 2012  
Número de radicación que responde: 20121210051603  
Tipo de respuesta: Total( ) Parcial( )

02 ABR 2012

103

	UNIDAD EJECUTORA	FIS - 018	
	DEPENDENCIA	HOJA 1 de 2	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA	
		6	3 2012

**ACTA No. 03**  
**RECIBO PARCIAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**CORRESPONDIENTES AL MES : 12 DE ENERO DE 2012 A 11 DE FEBRERO DE 2012**

**CONTRATO No** 147 **DE** 2011  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**  
 Prestación de servicios profesionales para la formulación de una propuesta jurídica para adelantar la fijación de políticas y la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, en lo relacionado con el sector transporte

**CONTRATISTA** IVAN DARIO GÓMEZ LEE C.C. No. 20.410.929  
(Escriba No de C.C. y/o C.R.C., nombre o razón social de contratista)

**INTERVENTOR y/o SUPERVISOR** WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO c.c. No. 70.629.630  
(Escriba No de C.C. y/o C.R.C., nombre o razón social del Interventor y/o supervisor)

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** Seis (6) meses

**PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO** \_\_\_\_\_

**VALOR INICIAL** \$ 75.000.000, incluido IVA

**VALOR ADICIONAL** \_\_\_\_\_


**VALOR TOTAL** \$ 75.000.000, incluido IVA


**PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** Seis (6) meses  
(Indicar en esta casilla el número de meses de plazo para ejecutar el contrato)

**GARANTÍAS**

AMPARO	No POLIZA O SU EQUIVALENTE (decreto 4828/2008)	VIGENCIA	CIA ASEGURADORA o SU EQUIVALENTE (decreto 4828/2008)
Cumplimiento del contrato de prestación de servicios	11-44-101028319	Desde 02/12/2011 Hasta 07/10/2012	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

En Bogotá, a los doce ( 12 ) días del mes de marzo de 2012, se reunieron IVAN DARIO GÓMEZ LEE, contratista, y WILDE ALEXANDER CORONADO MOLANO, Supervisor para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo de los trabajos ejecutados por el contratista



 Ministerio de Economía y Finanzas	UNIDAD EJECUTORA	FIS - 018	HDJA 1 de 2	
	DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA	
			6	3

TRABAJOS REALIZADOS Y ENTREGADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FORMA DE PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
INFORME	1	ESCRITO	12.500.000,00	12.500.000,00	ANEXO

VALOR TRABAJOS REALIZADOS	10.775.862,00
IVA (        %)	1.724.138,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	12.500.000,00

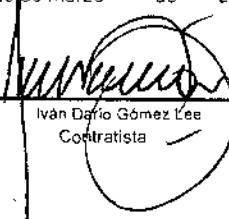
  

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS


% EJECUTADO DE RECURSOS A LA FECHA 34 % DE AVANCE FISICO 34 %

NDTA: El recibo por parte de la interventoría y/o supervisor de los trabajos ejecutados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo parcial los que en ella intervinieron a los doce días del mes de marzo de 2012.

(Firma) 

(Nombre) Iván Darío Gómez Lee  
Contratista

(Firma) 

(Nombre) Wilde Alexander Coronado Molano  
Supervisor

Original: Oficina Jurídica  
 Copia: Interventor y Supervisor  
 Copia: Contratista  
 Copia: Unidad Ejecutora

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
CONTABILIDAD

CONTRATISTA:	CONTRATO/ORDEN SERVICIO	147 DE 2011	CONTRATO Y/O O.S. ADICION No.	CTO O.S. PRINC. Y ADICIONES EN VIR. Y TIEMPO
VALIDIFICACION	80,410,929	\$ 75,000,000.00	VR. CTO O.S. SERV. PRINCIP BRUTO	VR. TOTAL CTO. BRUTO
DEPENDENCIA EJECUTORA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	\$ 64,655,172.00	VR. CTO O.S. PRINCIP SIN IVA	VR. TOTAL PRINC. ADIC. SIN IVA
INTERVENTOR O SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	SEIS (6) MESES	ADICION PLAZO DE EJECUCION	TOTAL PLAZO EJECUCION
FONDO DE PENSION:	COLFONDOS			
E. P. S.	SANITAS			

MES O PERIODO DE PAGO	VALOR SERVICIO SIN INCLUIR IVA	40% DEL VALOR PAGADO VIR. BASE DEL LIQUIDACION APORTES	VIR. 12.5% SOBRE VALOR BASE (40%) PARA SALUD	VIR. 16% SOBRE VALOR BASE (40%) PARA PENSION	VIR.APORTES PAGADOS POR EL CONTRATISTA EN SALUD	VIR.APORTES PAGADOS POR EL CONTRATISTA EN <u>PENSION</u>	VIR DIFERENCIA - APORTES SALUD- EN CONTRA O A FAVOR DEL CONTRATISTA	VIR DIFERENCIA - APORTE EN PENSION- EN CONTRA O A FAVOR DEL CONTRATISTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		CCL 2 X 40%	CCL 3 X 12.5%	CO. 3 X 16%		-	CCJ 4 MENOS COL 6	COL 5 MENOS COL 7
12-dic-2011 y el 11-sep-2012	10.775.862	4.310.345	538.793	689.655	-	-	(538.793)	(689.655)
12-ene-2012 y el 12-feb-2012	10.775.862	4.310.345	538.793	689.655			(638.793)	(689.655)
	21.551.724	8.620.690	1.077.586	1.379.310	-	-	(1.077.586)	(1.379.310)

OBSERVACIONES:	Aporte más de veinticinco (25) SMMI V en tanto no aborto para este contrato ningún valor
(1.572.310)	(1.572.310)

FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

FIRMA DEL CONTRATISTA

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES POR EL AREA FINANCIERA**

REVISOR

**COORDINADOR CONTABILIDAD**

**UBIDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



Detalles de la Planilla	Detalles de la Planilla	Detalles de la Planilla	Detalles de la Planilla
Periodo Pensión: Enero 2012, Periodo Salud: Marzo 2012		Fecha: 21 de 2012 10:17 AM	

Ingreso Planilla a Compensar

## Planilla / Pagos por Administradora

compensar-miplanilla.com

Razón Social Recauda	Compensar OI
MIT Recauda	9998600669427
Descripción	MiPlanilla.com Pago Protección Social
Fecha de Pago	21/02/2012
Periodo Cotización Salud	2/2012
Empresa	Ivan Darío Gomez Lee
NIT	80410929
Número de Radicación	8310733294
CUS Código único de seguimiento de la transacción:	1000000059
Número de Administradoras	2
Número de Empleados	1
Total Pagado	\$4.413,367.00
Medio de Pago	Pago en Cajas
Banco	Banco de bogota
Estado de la Transacción:	Transacción Aprobada

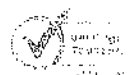
Nombres de los beneficiarios		Monto de la pensión		No. Afiliados	
231001	830227940	Cotizados	\$0.00	\$2,427,424.00	1
EPS005	830251440	Sanitas EPS	\$0.00	\$1,985,943.00	4

Le informamos que el pago de la planilla No. 8310733294, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporaneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

https://www.miplanilla.com

Tener los derechos de la planilla



COPIA DEL DOCUMENTO  
JUAN ANTONIO GOMEZ LEE  
C.C. 80.410.929 de Bogotá D.C.  
106

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2012

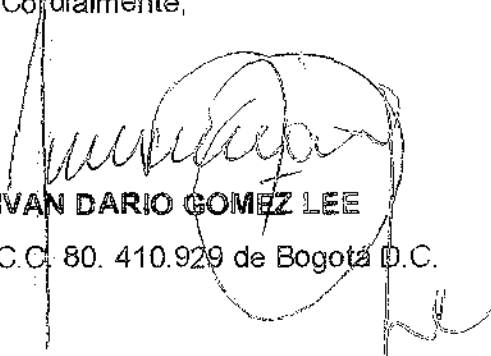
Señores

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

Respetados señores,

Para los fines establecidos en el artículo 4º del Decreto 2271 de 2009 y el Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento, que el documento soporte del pago de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden a la totalidad de mis ingresos. Por lo tanto no estoy en la obligación de cotizar un valor superior.

Cordialmente,



**IVAN DARIO GOMEZ LEE**

C.C. 80.410.929 de Bogotá D.C.

- e. Rendir informes mensuales por escrito al supervisor del contrato sobre las actividades adelantadas y de su gestión

**LABORES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:**

Por medio del presente hago entrega del segundo informe de actividades contractuales de acuerdo con el contrato N° 147 de 2011 suscrito con el Ministerio de Transporte. Este informe está compuesto por las obligaciones del mencionado contrato, una lista de actividades específicas y generales realizadas, la factura y los anexos respectivos. La relación de actividades es la siguiente:

Se realizó un estudio jurídico referenciado en un marco conceptual sobre expropiación en proyectos de infraestructura de transporte, que será el referente de una de nuestras tareas a desarrollar, con el fin y en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, que se expida un decreto para asegurar la ejecución de las disposiciones mencionadas en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

Se realizó un estudio normativo de las disposiciones que regulan la expropiación tanto administrativa como judicial, de bienes muebles e inmuebles en nuestro ordenamiento jurídico para llevar a cabo proyectos en diversos sectores de la economía nacional.

Asistí a varias mesas de trabajo con el equipo del Ministerio de Transporte los días 24 y 31 de enero de 2012, en las cuales fueron fijados los lineamientos para la reglamentación de la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte.

Se hizo estudio jurídico de la propuesta del articulado del decreto presentado por el INVIAS mediante el cual se reglamentará la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte, en la reunión llevada a cabo en el despacho de la viceministra de infraestructura con el equipo del Ministerio de transporte el 1° de febrero de 2012.

Así mismo, se llevó a cabo un estudio de la propuesta del articulado del decreto presentado por el IGAC mediante el cual se reglamentará la expropiación de bienes inmuebles en proyectos de infraestructura de transporte, luego de la reunión llevada a cabo en las instalaciones del IGAC con el equipo del Ministerio de Transporte el 14 de febrero de 2012.

*[Faint handwritten notes at bottom]*

## ANEXOS

6. Documento con los respectivos soportes, del presente informe.

- Factura N° 63 por valor de \$12.500.000

Formato pago de seguridad social

**JUAN CARLO GÓMEZ LEE**  
C.D. 80.410.929 de Bogotá.

Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

## ANEXOS:

### 1. INVESTIGACIÓN SOBRE EXPROPIACIÓN

#### 1.1. Régimen Constitucional de la Propiedad y la Expropiación

La Constitución Política de 1991 (C.P.), en el artículo 58 señala: "Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. (Negritas fuera de texto).

El inciso primero del artículo 58 de la C.P., empieza por garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos, lo cual imprime seguridad jurídica siempre y cuando la adquisición se hubiese efectuado con arreglo a las leyes civiles, que exigen para su reconocimiento un título justo y el cumplimiento de los presupuestos de existencia y validez de los actos jurídicos.

Al señalar que la propiedad y los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados o desconocidos por leyes posteriores, el artículo 58 de la C.P., consagra el principio

de la irretroactividad de la ley, en virtud del cual ésta no rige sino a partir de su vigencia para los hechos futuros; sin que sea viable aplicar la ley nueva a situaciones consolidadas bajo el imperio de leyes anteriores en el tiempo<sup>1</sup>.

No obstante lo anterior, el principio de irretroactividad de la ley no es absoluto y presenta excepciones cuando una norma se expide por motivos de moralidad o salubridad, ya que en tales casos tiene efecto general inmediato aunque limite derechos amparados por una ley anterior, porque el interés particular debe ceder ante el general. Tal es el sentido de la segunda parte del artículo 58 de la C.P.<sup>2</sup>.

La Constitución Política de 1991 impone al ejercicio de la propiedad privada exigencias relativas a las funciones social y ecológica de la propiedad y, en cuanto a la terminación del derecho, prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación por vía judicial y por vía administrativa cuando motivos de utilidad pública o interés social lo exijan siempre que haya una indemnización<sup>3</sup>.

Por expropiación se entiende la "desposesión que realiza el Estado de un derecho real de propiedad por motivo de utilidad pública a cambio de una indemnización"<sup>4</sup>.

La Corte Constitucional en sentencia de tutela T-284 de 1994 con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, definió la expropiación "(...) como un instituto, un negocio o una operación de derecho público por medio de la cual el Estado, por razones de utilidad pública o de interés social, priva coactivamente de la titularidad de un determinado bien a un particular, de acuerdo con un procedimiento específico y previo el pago de una indemnización."

<sup>1</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 109.

<sup>2</sup> Ibidem.

<sup>3</sup> Jaime Arteaga Carvajal. "De los Bienes y su Dominio". Segunda Edición. Editorial Facultad de Derecho. 1999. Pág. 46.

<sup>4</sup> Ramiro Bejarano Guzmán. Procesos Declarativos. Cuarta Edición. Temis S.A., Bogotá 2008. Pág. 403.

El constituyente de 1991 inicialmente concibió cuatro clases de expropiación: la judicial, la administrativa, la expropiación sin indemnización por motivos de equidad, (consagrada en los incisos 4° y 5° del artículo 58 y suprimida por el Acto Legislativo 1 de 1999), y la expropiación aplicable en caso de guerra, cuya indemnización puede no ser previa (a la que hace referencia el artículo 59 de la C.P.)<sup>5</sup>.

#### 1. Expropiación Judicial

De conformidad con el inciso 4° del artículo 58 de la C.P., para que proceda la expropiación judicial debe cumplirse con los siguientes requisitos<sup>6</sup>:

- a. Que una ley defina los motivos de utilidad pública o de interés social. La Ley se limita a determinar: el sujeto expropiante y los límites de su competencia, los sujetos pasivos de la expropiación, la definición de los motivos de utilidad pública e interés social que justifican la expropiación, la regulación del monto de la indemnización y la forma de pago, así como el procedimiento administrativo y judicial que debe surtir para adelantar la expropiación.

La ley puede ser formal o material, dictada por el legislador o por el gobierno excepcionalmente a través de decretos leyes, cuando ha sido investido por el Congreso de precisas facultades extraordinarias en los términos del numeral 10° del artículo 150 de la C.P., o mediante decretos legislativos dictados cuando se declara el estado de conmoción interior o el estado de emergencia.

<sup>5</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 110.

<sup>6</sup> Ibidem. Pag(s). 112-113.

El concepto de utilidad pública se orienta a beneficiar a la comunidad en general; el interés social hace relación a los sectores o grupos de la comunidad que de manera directa se benefician con la expropiación.

- b. Sentencia Judicial. El cumplimiento o no de este requisito diferencia la expropiación judicial de la expropiación por vía administrativa. Mientras que en la primera el título de adquisición del bien objeto de expropiación es la sentencia judicial cuando no fue posible la negociación voluntaria, en la segunda el título es la resolución que decreta la expropiación.
- c. Indemnización previa. Su monto será establecido por los peritos designados para el efecto, de acuerdo con las normas que reglamentan la forma de determinarlo. Se entiende como previa la definición y el reconocimiento del derecho del propietario con anterioridad a la expropiación, de tal manera que por una parte no se configure una expropiación arbitraria, y por otra, el propietario pueda contar desde entonces con bienes y valores enajenables y ciertos equivalentes al valor del bien expropiado<sup>7</sup>.

## 2. Expropiación Administrativa

Se encuentra consagrada en la segunda parte del inciso 4° del artículo 58 de la C.P.

Con este nuevo procedimiento se agiliza y hace más efectiva la incorporación de un bien al patrimonio estatal, mediante un trámite jurídico público y breve, previa indemnización económica, siempre y cuando responda a los motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador; requisito que al igual que en la expropiación judicial es de cumplimiento obligatorio, mediante una ley que los

<sup>7</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 113.



determine, norma que además señalará los casos en los que procede la expropiación administrativa, la entidad competente, el procedimiento y los criterios para calcular la indemnización y los mecanismos de defensa<sup>8</sup>.

La expropiación por vía administrativa tiene en común con la expropiación judicial que el legislador debe definir los motivos de utilidad pública o de interés social y la existencia de una indemnización previa. Se diferencia en que la adquisición del bien no está precedida de una sentencia judicial que fije la indemnización y determine su procedibilidad. Pero ello no significa una exclusión del control judicial sobre las actuaciones y decisiones de la Administración expropiante, puesto que las actuaciones de las autoridades responsables están sometidas al control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del ejercicio de las acciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), para controvertir la legalidad del acto administrativo que decreta la expropiación o la revisión del precio si en él radica la inconformidad del afectado<sup>9</sup>.

### 3. Expropiación en caso de guerra

Se encuentra regulada en el artículo 59 de la C.P., el cual establece: "En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes." (Negrillas fuera de Texto).

<sup>8</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 115.

<sup>9</sup> Ibídem. Pág. 114-115.

Esta norma plantea una tipo de expropiación que solo podrá ser utilizada en casos de confrontación bélica.

Del contenido de los dos primeros incisos de la norma objeto de estudio, se infiere que en estricto sentido esta expropiación recae sobre bienes muebles pues si se trata de inmuebles opera la simple ocupación con la posterior restitución al propietario.

Adicionalmente, a diferencia de las otras expropiaciones, ésta puede ser decretada por el gobierno sin definición legal de los motivos de utilidad pública e interés social. Tampoco requiere del pago previo de la indemnización, que puede ser posterior. Por último, los derechos de los afectados quedan salvaguardados en razón a que el Estado siempre responderá de las expropiaciones que adelante cualquiera de sus agentes<sup>10</sup>.

#### 4. Expropiación por razones de equidad

Este tipo de expropiación fue consagrada por primera vez en el Acto Legislativo 01 de 1936. Su texto se incorporó en el artículo 30 de la Constitución anterior, hasta la expedición de la C.P., de 1991 que incluyó en el inciso 5° del artículo 58 lo siguiente: "Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente. (Negritas fuera de Texto).

<sup>10</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 114-115.

Esta modalidad de expropiación solo fue desarrollada legalmente para dos situaciones:

- I. Para declarar de utilidad pública la adquisición de tierras en el archipiélago de San Andrés y Providencia, las que por razones de equidad podían ser expropiadas sin indemnización cuando fueran propiedad de extranjeros, ello tenía sustento en el artículo 36 de la Ley 1ª de 1972, la cual fue declarada inexecutable por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de noviembre de 1973.
- II. Como sanción a urbanizadores piratas que prometían en venta o promovían la ocupación de inmuebles para vivienda de interés social, violando las normas de urbanismo, ello estaba regulado en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1991, adicionado por el artículo 98 de la Ley 388 de 1997, los cuales fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional salvo las expresiones "Para los efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política", "de equidad" y "sin indemnización" contenidas en el inciso primero del artículo 53 de la Ley 9ª de 1991, y la expresión "siendo, entendido que no habrá lugar a indemnización alguna" del parágrafo del artículo 98 de la Ley 388 de 1997<sup>11</sup>.

El inciso 5º del artículo 58 de la C.P., fue suprimido mediante el Acto Legislativo 01 de 1999, por dos razones básicamente. En primer lugar porque vulneraba el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos, el cual prevé en su artículo 21.1; "Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social en los casos y según las formas establecidas en la Ley". En segundo lugar, por

<sup>11</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-158 del 8 de marzo de dos mil ocho (2008). M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.



de utilidad pública e interés social, también para expedir los actos administrativos e impulsar los procesos judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar<sup>14</sup>.

## 1.2. Desarrollo Legislativo de la Expropiación Administrativa

### 1.2.1. Expropiación por vía administrativa para obras de infraestructura del transporte

La Ley 105 de 1993, "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones", fue el primer estatuto que consagró en el contexto legislativo la expropiación por vía administrativa. Sin embargo, no señaló el procedimiento para hacer uso de tal mecanismo<sup>15</sup>.

El artículo 35 de la disposición en mención consagró la expropiación administrativa en los siguientes términos: "El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, los Departamentos a través del Gobernador y los Municipios a través de los Alcaldes, podrán decretar la expropiación administrativa con indemnización, para la adquisición de predios destinados a obras de infraestructura de transporte. Para el efecto deberán ceñirse a los requisitos señalados en las normas que regulen la materia."

<sup>14</sup> Ramiro Bejarano Guzmán. *Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales*. Quinta Edición. Temis S.A., Bogotá 2011. Pág. 403.

<sup>15</sup> El Consejo de Estado, mediante concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, del 2 de septiembre de 1996, con ponencia del Dr. Roberto Suárez Franco, Rad. AC-168, señaló: "En la actualidad no existe un procedimiento general aplicable a la expropiación por vía administrativa. Las normas del Código Contencioso Administrativo que reglamentan las actuaciones administrativas no son aplicables para adelantar dicho procedimiento, por cuanto no contienen reglas para tramitar asuntos tales como la oferta de compra, el monto de la indemnización y su forma de pago, indispensable para llevar a término toda expropiación." Ante la ausencia de un procedimiento aplicable no es posible ejecutar la provisión contenida en el artículo 35 de la Ley 105 de 1993 porque las normas sobre procedimiento no se pueden establecer por vía analógica o deducción." Jaime Orlando Santofimio. "Derecho Urbanístico". Universidad Externado de Colombia. 2004. Pág. 551.

No obstante lo anterior, el vacío legal que existía en cuanto al procedimiento para adelantar la expropiación administrativa en obras de infraestructura fue superado con la expedición de la Ley 388 de 1997, la cual en su artículo 72 dispuso: "El trámite para la aplicación de la expropiación por vía administrativa previsto en este capítulo se aplicará a los demás casos en que las leyes la hayan autorizado, siempre y cuando expresamente no se hubiere definido otro procedimiento."<sup>16</sup>

### 1.2.2. Expropiación Administrativa -Decreto 1158 de 1994

El poder ejecutivo, en ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 215 de la C.P., expidió el Decreto 1158 de 1994, "Por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas".

La norma bajo examen, declaró de utilidad pública e interés social, para efectos de ordenar la expropiación por vía administrativa con indemnización previa, la adquisición del derecho de dominio y los demás derechos reales respecto de los inmuebles necesarios para ejecutar los planes específicos encaminados a solucionar la calamidad pública<sup>17</sup>.

El artículo 1° del Decreto 1185 de 1994, estableció los fines a los cuales estaba dirigida la expropiación administrativa<sup>18</sup>, en los artículos 3°, 4°, y 5° determinó el

<sup>16</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 120.

<sup>17</sup> "El gobierno nacional expidió el Decreto 1185 de 1994, con ocasión de la calamidad pública producida por un sismo cuyo epicentro fue el municipio de Toribio y que afectó varios municipios de los departamentos de Huila y Cauca." Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 121.

<sup>18</sup> Decreto 1185 de 1994. Art. 1° "Declárase de utilidad pública e interés social para efectos de decretar la expropiación por vía administrativa con indemnización previa, la adquisición del derecho de dominio y de los demás derechos reales indispensables para la ejecución de los planes específicos encaminados a solucionar la calamidad pública ocurrida en varios municipios de los Departamentos de Huila y Cauca.

La expropiación a que se refiere el inciso anterior, estará dirigida al cumplimiento de los siguientes fines: 1. La construcción, reconstrucción y desarrollo de núcleos urbanos, en las áreas de desastre y de riesgo, o en otras zonas afectadas, así como la prevención del asentamiento en lugares que

procedimiento para la adquisición de inmuebles, el cual comprende las siguientes etapas: 1) *Negociación Voluntaria*. Una vez se hayan determinado los inmuebles a adquirir, el precio máximo de adquisición lo establecerá el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Una vez formulada la oferta de compra al propietario, se inscribe en el registro, lo cual deja el bien fuera del comercio. Si se acepta la oferta se suscribe el contrato. 2) *Expropiación Administrativa*. Agotada la etapa de negociación directa sin éxito, el representante legal de la entidad adquirente decreta la expropiación mediante resolución motivada cuyo texto incluirá el valor de la indemnización, la forma de pago y la orden de cancelar los gravámenes y embargos. La resolución debe notificarse personalmente o por edicto; contra ella procede el recurso de reposición y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Notificada la resolución, se procede a la entrega del bien expropiado; el acta de entrega y la resolución se inscriben en la oficina de registro<sup>19</sup>.

### 1.2.3. Expropiación Administrativa Urbanística

En materia urbana y de desarrollo territorial, los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 reglamentan la expropiación administrativa. Con base en ellos y en algunas normas de la expropiación judicial que lo son aplicables los requisitos de la

---

presenten grave riesgo. 2. La creación de la infraestructura urbana y rural adecuadas para albergar y dotar de vivienda y de servicios a la población afectada, en las áreas de desastre, riesgo y de influencia. 3. La entrega de terrenos a las comunidades indígenas para su explotación, con el fin de compensar las áreas de los territorios indígenas que no puedan ser habitadas o explotadas por presentar grave riesgo. Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, son áreas de desastre, de riesgo y de influencia, las siguientes: Son áreas de desastre aquellas cuyos ocupantes o inmuebles hayan sufrido daños directos por razón de la calamidad pública a que se refiere el Decreto 1178 de 1994. Las áreas de riesgo incluyen las de desastre y aquellas otras que, por su proximidad a esta zona podrían sufrir efectos similares. Las áreas de influencia son aquellas a las cuales se extienden las consecuencias sociales y económicas del desastre, en especial por el desplazamiento hacia esta zona de las personas que habitaban los municipios comprendidos por las áreas de desastre y de riesgo.

<sup>19</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 123.

expropiación urbanística administrativa son: 1) Que la finalidad pretendida con la adquisición coincida con los fines de utilidad pública e interés social definidos por el legislador. En tratándose de los motivos de utilidad pública o interés social que permiten la adquisición de inmuebles, el artículo 58 los menciona, por lo tanto la expropiación administrativa es procedente cuando el inmueble este destinado a cumplir alguno de los siguientes fines: a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana; b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos; d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios; e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes; g) Funcionamiento de las sedes administrativas de las entidades públicas, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y las de las sociedades de economía mixta, siempre y cuando su localización y la consideración de utilidad pública estén claramente determinados en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen; h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico; i) Constitución de zonas de reserva para la expansión futura de las ciudades; j) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos; k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley; l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los



demás sistemas previstos en esta ley ; y m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes." Además de los motivos contemplados en el artículo 58, también es procedente la expropiación por vía administrativa cuando se presenta el incumplimiento de la función social de la propiedad por parte del adquirente en pública subasta de los terrenos e inmuebles declarados de desarrollo y construcción prioritaria<sup>20</sup>. 2) Que la autoridad administrativa competente señalada por el concejo municipal o la junta metropolitana declare previamente que existen condiciones especiales de urgencia para la adquisición de los inmuebles. A diferencia de la expropiación judicial, donde se concedió la facultad a entidades públicas de todos los órdenes territoriales para la adquisición, la expropiación por vía administrativa urbanística está condicionada en cuanto a la declaración de los motivos de urgencia a los municipios, distritos y áreas metropolitanas. El artículo 65 de Ley 388 de 1997 consagra los criterios para la declaratoria de urgencia; "De acuerdo con la naturaleza de los motivos de utilidad pública o interés social de que se trate, las condiciones de urgencia se referirán exclusivamente a: 1. Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, según las directrices y parámetros que para el efecto establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 2. El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda el instrumento expropiatorio. 3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución del plan, programa, proyecto o obra. 4. La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea el caso.". 3) Que la expropiación se efectuó de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial. Todas las adquisiciones y expropiaciones deben hacerse de acuerdo con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial. 4) Que la decisión de carácter administrativo de la expropiación se tome desde la iniciación

<sup>20</sup> Primeras Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2001. Pág. 125.

del procedimiento mediante acto administrativo formal, que hace las veces de la oferta de compra. Esto protege la buena fe del propietario, puesto que desde un comienzo tiene el conocimiento de que si no vende de manera voluntaria se llevara a cabo la expropiación administrativa.

#### 1.2.4. Expropiación Administrativa para proyectos de infraestructura en materia de Transporte -Ley 1450 de 2011

El legislador expidió el Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1450 de 2011, la cual en su artículo 83 dispuso: "Para efectos de decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte. Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de infraestructura de transporte diseñado será el siguiente: 1. La entidad responsable expedirá una resolución mediante la cual determine de forma precisa las coordenadas del proyecto. 2. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC o la entidad competente según el caso, en los dos (2) meses siguientes a la publicación de la resolución de que trata el numeral anterior, procederá a identificar los predios que se van afectados por el proyecto y ordenará registrar la calidad de predios de utilidad pública o interés social en los respectivos registros catastrales y en los folios de matrícula inmobiliaria, quedando dichos predios fuera del comercio a partir del mencionado registro. 3. Efectuado el Registro de que trata el numeral anterior, en un término de seis (6) meses el IGAC o la entidad competente, con cargo a recursos de la entidad responsable del proyecto, realizará el avalúo comercial del inmueble y lo notificará a esta y al propietario y demás interesados acreditados. 4. El avalúo de que trata el numeral anterior deberá incluir el valor de las posesiones si las hubiera y de las otras indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar, por afectar dicha declaratoria el patrimonio de los particulares. 5. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para determinar el valor del precio de adquisición o

precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios en los procesos de enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa, teniendo en cuenta la localización, las condiciones físicas y jurídicas y la destinación económica de los inmuebles. 6. Los interesados acreditados podrán interponer los recursos de ley en los términos del Código Contencioso Administrativo contra el avalúo del IGAC o de la entidad competente. 7. En firme el avalúo, la entidad responsable del proyecto o el contratista si así se hubiere pactado, pagará dentro de los tres (3) meses siguientes, las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar. Al recibir el pago el particular, se entiende que existe mutuo acuerdo en la negociación y transacción de posibles indemnizaciones futuras. 8. Efectuado el pago por mutuo acuerdo, se procederá a realizar el registro del predio a nombre del responsable del proyecto ratificando la naturaleza de bien como de uso público e interés social, el cual gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. 9. De no ser posible el pago directo de la indemnización o compensación, se expedirá un acto administrativo de expropiación por parte de la entidad responsable del proyecto y se realizará el pago por consignación a órdenes del Juez o Tribunal Contencioso Administrativo competente, acto con el cual quedará cancelada la obligación. 10. La resolución de expropiación será el título con fundamento en el cual se procederá al registro del predio a nombre de la entidad responsable del proyecto y que, como bien de uso público e interés social, gozará de los beneficios del artículo 63 de la Constitución Política. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las personas objeto de indemnización o compensación a recurrir ante los Jueces Contencioso Administrativos el valor de las mismas en cada caso particular. 11. La entidad responsable del proyecto deberá notificar a las personas objeto de la indemnización o compensación, que el pago de la misma se realizó. Una vez efectuada la notificación, dichos sujetos deberán entregar el inmueble dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 12. En el evento en que las personas objeto de indemnización o compensación no entreguen el inmueble dentro del término señalado, la entidad responsable del proyecto y las autoridades locales competentes deberán efectuar el desalojo dentro del mes

siguiente al vencimiento del plazo para entrega del inmueble. Parágrafo 1°. El presente artículo también será aplicable para proyectos de infraestructura de transporte que estén contratados o en ejecución al momento de expedición de la presente ley. Parágrafo 2°. El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa". (Negrillas fuera de Texto).

Por su parte la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en el parágrafo 1° del artículo 87, norma a través de la cual se modifica el numeral 12 de la Ley 80 de 1993, reprodujo literalmente el contenido del artículo 83 de la Ley 1450 de 2011.

De conformidad con lo anterior, teniendo en cuenta el mandato del legislador sobre la reglamentación que debe hacer el gobierno nacional de las normas del Plan Nacional de Desarrollo antes mencionadas, éste a través del Ministerio de Transporte, el cual hace parte de la rama ejecutiva del poder público y conforma junto con los demás ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias el sector descentralizado de la administración pública nacional<sup>21</sup>, en cumplimiento de una de sus funciones como lo es la de "[p]reparar

<sup>21</sup> Ley 489 de 1998. Artículo 39. "La Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano. La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos, en lo nacional, son los organismos principales de la Administración. Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias constituyen el Sector Central de la Administración Pública Nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un Departamento Administrativo que gocen de personería jurídica, autonomía administrativa y

proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa (...)»<sup>22</sup>, y en ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, debe reglamentar las normas antes mencionadas con el fin de asegurar la ejecución de las disposiciones señaladas en materia de expropiación de bienes inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte.

Por último cabe señalar que el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 consagró el procedimiento que deben seguir las entidades del orden nacional para la creación de cualquier trámite que afecte a los ciudadanos. Adicionalmente confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República con el fin de que éste expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes al interior de la administración pública<sup>23</sup>.

---

patrimonio propio o capital independiente conforman el Sector Descentralizado de la Administración Pública Nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley. (...)» (Negritas fuera de texto).

<sup>22</sup> *Ibíd.* Artículo 59. "Corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales: 1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo. 2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones. (...)".

<sup>23</sup> Ley 1474 de 2011. Artículo 75. "Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, estas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. Dicho documento deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso de treinta (30) días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. En caso de que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (...)". (Negritas fuera de texto)

### 1.2.5. Conclusiones

Antes de la expedición de la Constitución Política del 1991, la Carta anterior consagraba la expropiación, con un alcance menor, bajo su vigencia se expedieron no sólo las actuales normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el proceso de expropiación<sup>24</sup>, sino también las Leyes 56 de 1981 y 9ª de 1989, con posterioridad fue expedida la Ley 388 de 1997.

En virtud de la Ley 56 de 1981, específicamente de sus artículos 9º, 10 y 11, se legisló sobre la expropiación de zonas para planes de energía eléctrica o acueducto<sup>25</sup>.

La Ley 9ª de 1989, denominada ley de vivienda urbana, autorizó la compraventa y expropiación de bienes inmuebles urbanos y suburbanos para destinarlos a la ejecución de planes de desarrollo, de vivienda de interés social, de preservación del patrimonio cultural, incluidos el histórico y el arquitectónico en zonas urbanas y rurales, la constitución de zonas de reserva para la protección del ambiente y de los recursos hídricos; para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los campos de la salud, educación, turismo, recreación deporte, ornato y seguridad y la ejecución de proyectos de ampliación; desarrollo de sistemas de transporte masivo de pasajeros; para el funcionamiento de las sedes administrativas de la nación, de las entidades territoriales, áreas metropolitanas y asociaciones de municipios y los establecimientos públicos; para la ejecución de obras públicas; provisión de espacios públicos urbanos; programas de almacenamiento, procesamiento y distribución de bienes de consumo básico; legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales; reubicación de asentamientos urbanos humanos ubicados en sectores de alto riesgo y

<sup>24</sup> Ramiro Bejarano Guzmán. Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales. Quinta Edición. Temis S.A., Bogotá 2011. Pág. 401.

<sup>25</sup> Ibidem.

rehabilitación de inquilinatos; ejecución de proyectos de urbanización o construcción prioritarios en los planes de desarrollo, proyectos de integración o readaptación de tierras<sup>26</sup>.

La expropiación constituye un límite al derecho de propiedad consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política, razón por la cual la connotación liberal y absoluta de este derecho, ha sido superada y como consecuencia, su comprensión admite restricciones. Lo anterior teniendo en cuenta la función social y el interés general que enmarcan el derecho de propiedad en un Estado Social de Derecho como el colombiano<sup>27</sup>.

Adicionalmente el derecho moderno reconoce a la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado de la evolución de principios de orden filosófico y político que han influido en el proceso de su consolidación jurídica, los cuales han contribuido a limitar en buena medida los atributos o poderes exorbitantes reconocidos a los propietarios por el derecho romano<sup>28</sup>.

La Corte Constitucional, en relación con la expropiación ha señalado que: "(...) constituye un medio o instrumento del cual dispone el Estado para incorporar al dominio público los bienes de los particulares, previo el pago de una indemnización, cuando éstos se requieran para atender o satisfacer necesidades de utilidad pública e interés social, reconocidas o definidas por la ley con intervención de la autoridad judicial (expropiación judicial) o mediante la utilización de los poderes públicos expropiatorios del régimen administrativo (expropiación administrativa). También se le ha dado sustento a la expropiación con fundamento en la función social de la propiedad cuando se la utiliza con fines de redistribución

<sup>26</sup> Ramiro Bejarano Guzmán. "Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales". Quinta Edición. Temis S.A., Bogotá 2011. Pág. 402.

<sup>27</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera. C.P. Dr. Enrique Gil Botero. Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil nueve (2009). Rad. No. 05001-23-26-000-1999-03867-01(20528).

<sup>28</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-218 de 9 de junio de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

de la propiedad o para conminar a los propietarios a explotar las tierras en forma eficiente o con arreglo a programas de producción diseñados por el Estado.<sup>29</sup>

De acuerdo con el Alto Tribunal Constitucional, la figura de la expropiación comporta una limitación al derecho de propiedad el cual no se anula con tal figura, "(...) simplemente a través de ésta se pone en vigencia y se hace operativo y realizador el principio de la prevalencia del interés público o social sobre el interés particular; la indemnización que se reconoce al propietario expropiado compensa o subroga el derecho del cual ha sido privado, su derecho de propiedad se transforma en un derecho de crédito frente a la entidad pública expropiante, por el valor de la indemnización."<sup>30</sup> Adicionalmente, según esa corporación, "[c]orresponde al legislador, siguiendo la filosofía del texto constitucional determinar el sujeto expropiante y los límites de su competencia, los sujetos pasivos de la expropiación, la definición de los motivos de utilidad pública e interés social que justifican la expropiación, la regulación del monto de la indemnización y la forma de pago, así como el procedimiento administrativo y judicial requerido para llevar a cabo la expropiación."<sup>31</sup>

La expropiación judicial, goza, entre otras, de las siguientes características: "Es la regla general, y se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, sea porque el propietario se niegue a negociar, o porque guarde silencio, o porque no cumpla con el negocio (Artículo 20 Ley 9ª de 1989). Se lleva a cabo por medio de una resolución que admite recurso de reposición. En firme esta resolución, la Administración demanda ante la jurisdicción civil al propietario para que entregue el inmueble, por medio del proceso especial de

<sup>29</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-216 del 9 de junio de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

<sup>30</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> Ibidem.



expropiación, contenido en la Ley 9ª de 1939, Ley 388 de 1997 y Código de Procedimiento Civil.<sup>32</sup>

Por su parte, la expropiación administrativa, tiene las siguientes características: "También se presenta luego de fracasada la negociación entre la Administración y el propietario, pero es excepcional en la medida que es necesario que se configure una emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia para adquirir el predio mediante el trámite de expropiación administrativa, es decir, solo procederá cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos expresamente en la ley (artículo 63 Ley 388 de 1997), previa declaratoria de urgencia cuyas causales también están expresamente delimitadas en la Ley (artículo 65, ibidem) (...) La declaración de las condiciones de urgencia, que autorizan la expropiación por vía administrativa será realizada por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante Acuerdo. Esta instancia tendrá la competencia general para todos los eventos, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 388 de 1997. En ese orden de ideas, considera el Alto Tribunal Administrativo, "(...)[Q]ue ante el fracaso de la etapa de enajenación voluntaria y la falta de condiciones de urgencia manifiesta, la Administración tiene la competencia para iniciar por vía judicial la expropiación, previa resolución que se notifica conforme a los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo, por mandato expreso del artículo 62 de la Ley 388 de 1997."<sup>33</sup>

En relación con la expropiación por vía administrativa, aquí la decisión de expropiar tal y como lo señaló el Consejo de Estado en las sentencias antes mencionadas, puede ser tomada por la administración y no por los jueces, tema

<sup>32</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Rad. No. 25000-23-24-000-2008-00434-01.

<sup>33</sup> Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Rad. No. 25000-23-24-000-2008-00434-01.

que ha sido muy debatido y respecto del cual el gobierno ha presentado un proyecto de ley que pretende limitar esta figura a la expropiación de bienes inmuebles para obras públicas, reforma agraria y reforma urbana, lo cual era posible antes de la reforma constitucional, por mandato legal<sup>34</sup>.

En conclusión la expropiación por vía administrativa debe producirse con plena observancia de las garantías constitucionales al derecho de propiedad y de las disposiciones legales que otorguen competencia para declararla por parte de funcionarios gubernamentales, quienes habrán de proceder en estos casos a la manera de jueces<sup>35</sup>.

Cabe señalar que la expropiación administrativa, de conformidad con lo expuesto anteriormente, se encuentra regulada en los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997, y en tal procedimiento administrativo la intervención judicial no es predicable, tan es así que el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, señala que si se decreta la expropiación para los fines previstos en esta ley, la entidad procederá al pago de la indemnización o a su consignación a órdenes del tribunal contencioso administrativo del lugar donde se encuentre el bien, en cuyo caso, una vez efectuado el registro de la decisión de expropiación, "la entidad pública podrá exigir la entrega material del bien expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía, si es necesario."

En relación con la expropiación judicial la cual se encuentra contenida en los artículos 451 a 459 del Código de Procedimiento Civil (C.P.C), cabe señalar lo siguiente, el profesor Ramiro Bejarano Guzmán sostiene que desde siempre el C.P.C., ha permitido la expropiación de bienes muebles, desde antes de la

<sup>34</sup> Ramiro Bejarano Guzmán. "Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales". Quinta Edición. Temis S.A., Bogotá 2011. Pág(s). 402 a 403.

<sup>35</sup> Ibidem. Pág. 403.

reforma constitucional de 1991, como se evidencia en el inciso final del artículo 451, que obliga a formular la demanda contra el acreedor prendario, lo cual solo es posible si se trata de expropiar bienes muebles. Además el artículo 452 del C.P.C., al autorizar la notificación mediante edicto del auto admisorio de la demanda, no deja duda alguna de que, desde siempre, está reglamentada y autorizada la expropiación de muebles, al disponer que copia de ese edicto "se fijará en la puerta de acceso al inmueble objeto de la expropiación o del en que se encuentren los inmuebles"<sup>36</sup>.

Sobre este último punto, vale la pena mencionar que efectivamente el ordenamiento jurídico colombiano permite la expropiación de bienes muebles, el artículo 58 de la C.P., señala que el derecho de propiedad, el cual recae sobre bienes inmuebles y muebles en tratándose de cosas corporales<sup>37</sup>, puede verse afectado por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador.

Por último, vale la pena mencionar que la expropiación, en especial la que puede ser llevada a cabo por vía administrativa es el instrumento idóneo para adquirir inmuebles por parte las entidades estatales, más que aquella que debe llevarse a cabo por vía judicial la cual es lenta y tortuosa e impide a las autoridades cumplir con los programas catalogados como prioritarios dentro periodo constitucional para el cual son elegidas, tal y como lo sería la construcción de vías y el mejoramiento de la infraestructura en el sector del transporte en Colombia.

<sup>36</sup> Ramiro Bejarano Guzmán. "Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales". Quinta Edición. Temis S.A., Bogotá 2011. Pág. 403.

<sup>37</sup> Código Civil. Artículo 854. "Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles."

## 2. ESTUDIO SOBRE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

### 2.1. Experiencias Extranjeras Exitosas

Los orígenes de cambio del modelo estándar de la contratación pública surgen inicialmente a partir de las preocupaciones sobre el nivel de deuda pública y el incremento de esta durante 1970 y 1980. Las Administraciones públicas, empezaron a adelantar proyectos donde se alentara al sector privado a generar inversión en proyectos de infraestructura. En particular, se argumentó que los modelos de participación donde se le da un mayor papel al sector privado, generarían una mejor asignación de los riesgos, al contar con la experiencia y tecnologías que el sector efectivamente podría brindar, gran parte de esta actividad se inició en la década de 1990, siendo los británicos los grandes precursores del modelo hoy objeto de regulación en Colombia y que se explica en la tercera parte de esta publicación.

#### 2.1.1. Reino Unido

En 1992, el gobierno de John Major en el Reino Unido introdujo la iniciativa de financiación privada (PFI) <sup>38</sup>, el primer programa sistemático encaminado a fomentar asociaciones público-privadas. El programa de 1992 se centró en la reducción del gasto público. Posteriormente el trabajo del gobierno de Tony Blair, elegido en 1997, insistió en el PFI, pero enfocándose ya no en la reducción del gasto público como prioridad sino hacia el logro de "valor por dinero", principalmente a través de una adecuada asignación de riesgos<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Stoman, John. (2004) Essentials of Economics (3rd edition) Pearson Education Limited, Essex

<sup>39</sup> A whole world sold on sell-offs, Ten years after the fall of its great exponent, privatisation has become the common currency of political parties, consultado, 9/01/2012

Los gobiernos de distintos países han probado la efectividad en la reducción de costos y carga administrativa, y el incremento en la calidad de los servicios, mediante el uso de medios alternativos en alianza con el sector privado, "outsourcing". Esto se debe principalmente a que el Gobierno no cuenta en todos los casos con el personal, los recursos y el "know-how" indicados para desarrollar algunas de las actividades que se requieren para proveer servicios públicos, por ejemplo; carreteras, hospitales e instituciones educativas. Como uno de los esquemas de subcontratación de servicios más populares en los últimos años se encuentran las asociaciones público-privadas, en donde el gobierno se apoya de empresas privadas especializadas en diseño, construcción, financiamiento y operación de infraestructura social. El reto de la industria es reconocer y adaptarse a los nuevos esquemas de contratación que tienen como objetivo principal establecer relaciones comerciales sanas y estrechas entre los sectores público y privado que han mostrado reticencias para trabajar juntos.<sup>40</sup>

Las asociaciones público-privadas son iniciativas de colaboración voluntaria entre diversos actores del sector público (Estado) y del sector privado (no estatal), en las que las partes acuerdan trabajar juntas para lograr un propósito común o emprender tareas específicas. Las asociaciones pueden tener diferentes objetivos, como hacer avanzar una causa, aplicar normas o códigos de conducta o intercambiar y coordinar recursos y conocimientos técnicos<sup>41</sup>.

Estos son algunos de los casos exitosos en el Reino Unido:

- Dartford River Crossing; concesión para un segundo cruce vehicular sobre el río Dartford, cerca de Londres, de 2,5 km, mediante un contrato BOT a 30 años. El costo total del proyecto fue de US\$ 329 millones, la inversión fue completamente privada.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> <http://www.pwc.com/mx/es/sectores-construccion/asociacion-publica-privada.html>; Consultado 9/10/12

<sup>41</sup> [www.ito.org/wcmsp5/groups/public/-ed\\_/wcms\\_090614.pdf](http://www.ito.org/wcmsp5/groups/public/-ed_/wcms_090614.pdf) Esta definición ha sido elaborada a partir de definiciones del término «asociaciones» empleadas comúnmente en documentos de las Naciones Unidas (véase, por ejemplo, Building partnerships: cooperation between the United Nations system and the private sector; Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas)

<sup>42</sup> Corporación Andina de Fomento, CAF, Financiamiento Privado de Infraestructura, Estudio de alternativas y experiencias en materia de proyectos PPP, para América Latina, 2004.

- Second Severn Crossing; puente de 5 km, que cruza el río Severn. Para la realización de este proyecto se creó una compañía pública de propósito exclusivo, llamada "Second Severn Crossing, Severn PLC". El consorcio formado por Jhon Laing Construction y GTM Europe, diseño y construyó el proyecto de UK £ 330 millones. La firma francesa COFIROUTE, fue contratada para operar el puente por 30 años.<sup>43</sup>

### 2.1.2. Canadá

La consolidación en Canadá de las asociaciones público privadas conocidas por ellos como P-3 (public, private, partnership) ha sido liderada por el Consejo Canadiense para la Colaboración Público-Privada (PPP) establecido en 1993 y transformado en corporación en febrero de 2009<sup>44</sup>. El Consejo es una organización integrada por representantes tanto del sector público como del privado quienes investigan, publican y facilitan espacios de discusión sobre temas relacionados con las APP, tanto nacionales como internacionales. Cada año, el Consejo celebra el éxito de asociaciones público-privadas a través del programa de premios nacionales que se lleva a cabo simultáneamente con la conferencia anual en noviembre.

Sostuvo el Presidente de la Corporación, Greg Melchin, en el reporte anual 2010-2011, la importancia de los modelos APP y el impacto que han tenido estos tanto para el sector privado como para el sector público canadiense, generando grandes retos en ambos sectores como la necesidad de actualización y desarrollo de soluciones integradas para el diseño, construcción, financiación y operación de la infraestructura pública esperada y requerida por los canadienses<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> ibidem

<sup>44</sup> [http://www.p3canada.ca/files/PPP%20Canada%20Annual%20Report%202010-11\\_EI1.pdf](http://www.p3canada.ca/files/PPP%20Canada%20Annual%20Report%202010-11_EI1.pdf); consultado el 9/01/12

<sup>45</sup> The advent of P3s has driven changes within industry and government. For industry, it has required the development of integrated solutions drawing together leading expertise in the design, construction, finance and operation of public infrastructure. For

Entre los casos exitosos que podemos mencionar en Canadá se encuentran los siguientes:

- A25 (Quebec). El proyecto implicó construir una autopista de 7.2 km de extensión con cuatro carriles. Incluye un puente de seis carriles con peaje. El concesionario operará y dará mantenimiento a la concesión un por periodo de 35 años. La transacción fue cerrada en el 2007 y representó una inversión de US\$ 450 millones.<sup>46</sup>
- Canadá Line (Vancouver, BC). Forma parte del Metro de Vancouver. Implicó el diseño, construcción, financiamiento parcial, operación y mantenimiento del proyecto. La transacción fue cerrada en el 2005 y representó una inversión de US\$ 1,400 millones.<sup>47</sup>

Sin duda, adoptando las mejores prácticas de estas experiencias internacionales, Colombia también puede verse beneficiario de este enfoque innovador para sus necesidades de infraestructura.

### 2.1.3. América Latina

Según los estudios de la CEPAL, la situación latinoamericana en materia de infraestructura no es alentadora, en función de atraso crónico que existe en Latinoamérica en materia de infraestructura, se requieren al menos, US\$ 60.000 millones anuales de inversión en infraestructura, y tan solo el 10% de esa cifra, podría ser cubierto con préstamos a los gobiernos conforme a sus capacidades de endeudamiento y a las propias disponibilidades de organismos multilaterales.

El Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, miembro del grupo BID, han generado espacios para compartir

---

governments, it has required defining what services Canadians expect from their public infrastructure and using the disciplines of competition and capital markets to ensure the private sector delivers.

<sup>46</sup> Por qué optar por una asociación público-privada? Entrevista Gestión, viernes 21 de enero de 2011, <http://www.pwc.com/pe/es/prensa/por-que-oprar-una-asociacion-publico-privada.html>, consultada 11/01/12

<sup>47</sup> ibídem

conocimientos, lecciones aprendidas y mejores prácticas para promover el acceso a servicios básicos e infraestructura bajo los esquemas PPP de América Latina y El Caribe. Resulta de gran importancia la aplicación del infrascopio, índice que evalúa la adecuación y la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para supervisar y poner en marcha las PPP en los sectores de agua y de transporte. El infrascopio fue desarrollado por el Economist Intelligence Unit (EIU) con el apoyo financiero del FOMIN y recursos del Fondo General de Cooperación de España.<sup>48</sup> Existe en la región también el "Programa de Promoción de Asociaciones Público-Privadas (PPP) en América Latina y El Caribe (LAC)" en el que el FOMIN trabaja con los gobiernos interesados en el fortalecimiento de la capacidad legal, regulatoria e institucional para planificar y llevar a cabo asociaciones público-privadas de infraestructura y servicios públicos.

El FMI, en colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, llevó a cabo estudios piloto en los que se analizó cómo ocho países - Brasil, Chile, Colombia, Etiopía, Ghana, India, Jordania y Perú— encaraban sus necesidades de inversión pública, entre ellas la inversión en infraestructura. En estos países, la necesidad de contar con nuevas carreteras y con un mejor mantenimiento vial parece ser sumamente aguda, pero también aparecen otras necesidades en otros sectores, como puertos, energía, telecomunicaciones y servicios de agua potable y saneamiento.

## 2.2. Tipos Internacionales de Asociaciones Público Privadas

En este acápite se explican en forma esquemática los principales tipos internacionales de APP, categorías que consideramos serán importantes al

<sup>48</sup> <http://www.jado.org/en/research-and-data/research-data/1312.html>, consultado 12/01/12



momento de expedirse la reglamentación de la Ley, o para estimular la creatividad en su desarrollo y a la vez por parte de los organismos de control.

### 2.2.1. BOT (Build Operate Transfer)

El modelo BOT, consiste en la construcción, operación y transferencia de una infraestructura, por parte de un ente privado, durante un período determinado. Durante este período, la parte privada tiene la responsabilidad de aumentar la financiación para el proyecto y tiene derecho a retener todos los ingresos generados por el proyecto. La obra se transfiere a la administración pública al final del contrato por medio del cual fue materializado. Usualmente la Administración tiene la iniciativa del proyecto de infraestructura y decide si el modelo BOT es apropiado para satisfacer sus necesidades, circunstancias políticas y económicas son los factores principales de esta decisión.

En general, el proyecto es financieramente viable para la entidad privada, si los ingresos generados por el proyecto han de cubrir sus costos y proveer suficiente retorno sobre la inversión. Por otro lado, la viabilidad del proyecto para la Administración depende de su eficiencia en comparación con la economía de la financiación del proyecto con fondos públicos, concepto introducido en Colombia como valor por dinero<sup>49</sup>, según los estudios del concepto inglés de *value for money*, realizado por el Departamento Nacional de Planeación.

### 2.2.2. BOOT (Build Own Operate Transfer)

Una estructura BOOT se diferencia de una BOT en que la entidad privada que construye es propietaria de las obras, con el objetivo primordial de recuperar los

<sup>49</sup> El resultado de la comparación del valor presente de los costos de desarrollar un proyecto bajo el esquema de Proyecto Público, al que se denomina Proyecto Público de Referencia (PPR), con el valor presente de los costos teóricos netos del mismo proyecto desarrollado bajo APP se define como Valor por Dinero (VPD).

costos de inversión y mantenimiento al tratar de lograr un mayor margen en el proyecto. Las características específicas de la BOOT son: fomentar la inversión privada, inyectar capital extranjero al país, generar una transferencia de tecnología y del "know how"- saber cómo, completar los proyectos dentro del marco de tiempo y la liberación de la carga del presupuesto público para el desarrollo de infraestructura.

#### 2.2.3. BOO (Build Operate Own)

El tipo BOO da a la empresa privada el beneficio de cualquier valor residual del proyecto. Este tipo de APP se utiliza cuando la vida física del proyecto coincide con el período de concesión. Un esquema BOO involucra grandes cantidades de financiamiento a largo plazo de amortización.

#### 2.2.4. BLT (Build Lease Transfer)

En un modelo BLT, una entidad privada construye un proyecto y lo alquila a la Administración, en otras palabras, la propiedad es privada y la operación se da en arriendo. Después de la expiración del arrendamiento, la propiedad del activo y la responsabilidad operativa son transferidas a la Administración a un precio previamente acordado.

#### 2.2.5. DBFO (Design Build Operate Finance)

Diseño, construcción, financiación y explotación es un método de entrega de proyectos, en el que no hay transferencia de la propiedad. Por otra parte, el contratista asume el riesgo de financiar hasta el final del período del contrato. El propietario asume entonces la responsabilidad del mantenimiento y operación. Algunas desventajas de DBFO son las dificultades con las relaciones a tan largo

plazo, La Administración tiene la ventaja de que sigue siendo el propietario de la instalación y al mismo tiempo que evita el pago directo de los usuarios.

#### 2.2.6. DCMF (Design Construct Manage de Finance)

Algunos ejemplos para el modelo de DCMF son las cárceles o del público en los hospitales. Una entidad privada se contrata para diseñar, construir, administrar y financiar una instalación, basados en las especificaciones de la administración.

### 2.3. Regulación de las APP en Colombia

#### 2.3.1. Marco constitucional y legal

Como plantea Salomón Kalmanovitz,<sup>50</sup> la Constitución Política de Colombia pasó de ser una Constitución con un corporativismo autoritario y centralista, una alta protección arancelaria, una tributación baja, un gasto social pequeño y un banco central que racionaba el crédito y que admitía una inflación moderada; a una Constitución con un mayor compromiso con el gasto público social, la privatización de algunas empresas del Estado, una descentralización relativa, mayor libertad económica y un banco central comprometido a reducir la inflación, esta es la Constitución de 1991, una Carta con principios liberales, el que nos ocupa en este estudio, la libertad económica, siendo este nuevo paradigma la base de los modelos APP. En fin, que los agentes multipliquen los intercambios y la riqueza que es creada por la división del trabajo, la especialización y el aumento progresivo de la productividad de todos los factores.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Constitución y modelo económico, Diez años de la Constitución colombiana, Salomón Kalmanovitz 1991-2001. Debate de Evaluación. Facultad de Derecho, Universidad Nacional e ILSA. 14 y 15 de junio de 2001.

<sup>51</sup> Las teorías económicas de Adam Smith en el movimiento Open Source, La Flecha. 26 de mayo de 2004, <http://www.laflecha.net/canales/softlibre/200405261/> Consultado 17/01/2012. Adam Smith, el fundador de la economía como ciencia moderna, tenía una concepción muy clara sobre el desarrollo económico, para Smith, el desarrollo económico surge del intercambio entre los individuos que requiere de una especificación adecuada de la libertad económica, que el Estado defienda los derechos de propiedad de los agentes, que regule los mercados adecuadamente para lograr su profundización, que los contratos tengan cumplimiento obligatorio.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 333<sup>52</sup> avala la participación de capital privado en los servicios públicos y desarrollo de infraestructura al contemplar la libertad económica como principio, delimitada por el bien común y que como establece el artículo supone responsabilidades. La libertad económica está enmarcada bajo la intervención estatal, dos principios que a simple vista podrían ser contradictorios, por el contrario propugnan por un desarrollo económico con la participación tanto del sector público como del privado. El Estado, fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial, premisa que garantiza a la vez un desarrollo público para beneficios mutuos.

De acuerdo con el Documento CONPES 3615 de 2009, las asociaciones público privadas corresponden una tipología general de relación público privada materializada en un contrato entre una organización pública y una compañía privada para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados en un contexto de largo plazo, financiados parcial o totalmente con pagos por resultados diferidos en el tiempo por parte del Estado. Dicha asociación se traduce en retención y transferencia de riesgos, en derechos y obligaciones para las partes, en mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y servicio, incentivos y deducciones, y en general, en el establecimiento de una regulación integral de los estándares de calidad de los servicios contratados e indicadores claves de cumplimiento.

<sup>52</sup> ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

El artículo 32, parágrafo 2,<sup>53</sup> de la Ley 80, reguló el tema relativo a concesiones a iniciativa de particular y modalidades de asociación, después de 15 años de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, se reglamenta el parágrafo en mención, este fue expresamente derogado por el artículo 38 de la Ley 1508 de 2012. Las ofertas de iniciativa privada estaban reglamentadas en el Decreto 4533 de 2003, que ante la derogatoria de la ley que reglamento, es una norma no aplicable por operar su pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento.<sup>54</sup>

### 2.3.2. Marco reglamentario anterior

Las ofertas de iniciativa privada estaban reglamentadas en el Decreto 4533 de 2003, que como se señaló, es una norma no aplicable por operar su pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento, allí las ofertas eran definidas como: *"los proyectos presentados por personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad futura, o cualquier otra modalidad de asociación prevista en la ley, a una entidad estatal concedente para el diseño, la construcción, operación*

<sup>53</sup> Parágrafo 2o. Las personas interesadas en celebrar contratos de concesión para la construcción de una obra pública, podrán presentar oferta en tal sentido a la respectiva entidad estatal en la que se incluirá, como mínimo, la descripción de la obra, su pre factibilidad técnica y financiera y la evaluación de su impacto ambiental. Presentada la oferta, la entidad estatal destinataria de la misma la estudiará en el término máximo de tres (3) meses y si encuentra que el proyecto no es viable así se lo comunicará por escrito al interesado. En caso contrario, expedirá una resolución mediante la cual ordenará la apertura de la licitación, previo cumplimiento de lo previsto en los numerales 2o. y 3o. del artículo 30 de esta ley.

Cuando además de la propuesta del oferente inicial, se presente como mínimo una propuesta alternativa, la entidad estatal dará cumplimiento al procedimiento de selección objetiva previsto en el citado artículo 30.

Si dentro del plazo de la licitación no se presenta otra propuesta, la entidad estatal adjudicará el contrato al oferente inicial en el término señalado en el respectivo pliego, siempre que cumpla plenamente con los requisitos exigidos en el mismo.

Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con una o más personas naturales o jurídicas cuyo concurso consideren indispensable para la cabal ejecución del contrato de concesión en sus diferentes aspectos. Para el efecto, indicarán con precisión si pretenden organizarse como consorcio, unión temporal, sociedad o bajo cualquier otra modalidad de asociación que consideren conveniente. En estos casos deberán adjuntar a la propuesta un documento en el que los interesados expresen claramente su intención de formar parte de la asociación propuesta. Al mismo tiempo deberán presentar los documentos que acrediten los requisitos exigidos por la entidad estatal en el pliego de condiciones.

Cuando se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este parágrafo, el documento de intención consistirá en una promesa de contrato de sociedad cuyo perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el contrato se le adjudique. Una vez expedida la resolución de adjudicación y constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de concesión se celebrará con su representante legal.

<sup>54</sup>El decaimiento o pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo, como un decreto reglamentario, es una situación distinta a la derogatoria, que se produce cuando las disposiciones legales que le sirven de sustento, desaparecen del ordenamiento jurídico. Este fenómeno se ha explicado en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina dada la omisión de expedir un decreto reglamentario único. Contratación Visible, Manual para un buen manejo de los recursos públicos, Iván Darío Gómez Lee, 2011.

y mantenimiento de una obra pública a través de un contrato de concesión”.<sup>55</sup>

Sobre el alcance de la oferta se decreto, que estas podrían versar sobre cualquier obra pública susceptible de ser diseñada, construida, operada y mantenida mediante un contrato de concesión, menciona también la posibilidad de referirse estas a obras nuevas.

El régimen de las ofertas contempladas por el decreto, como lo señala el artículo 3º del mismo, está sujeto a la Ley 80, al no constituir oferta mercantil. Respecto a la publicidad de la oferta señaló el decreto; *“Tanto la oferta como los estudios y demás documentos que la acompañen serán públicos y podrán ser usados por la entidad estatal concedente en el procedimiento de la licitación”*. El decreto reglamento lo relativo al procedimiento, dividiendo el proceso en etapas; Estudio de la viabilidad de la oferta, calificación de la oferta, modificaciones a la oferta, elaboración del pliego de condiciones y selección del concesionario.

#### **2.4. Ley 1508 de 2012, nuevo régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas en Colombia.**

El proyecto de ley No. 160 de 2011 de Senado y 144 de 2011 de Cámara *“Por el cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”*. De autoría del Ministerio de Hacienda y con mensaje de urgencia en el trámite legislativo, fue discutido en las plenarias de Cámara y Senado y aprobado el jueves 16 de diciembre, en último debate. El proyecto pasó de inmediato a sanción presidencial el martes 10 de enero de 2012, y es hoy, la Ley 1508 de 2012, nuevo régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas en Colombia, el régimen abarca iniciativas públicas y privadas para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura.

Para el coordinador ponente, el Representante Juan Felipe Lemos Uribe, las APP se deben entender como: *"(...) mecanismos de financiación complementarios, para obtener financiación adicional para la actividad del sector público, capturando una serie de eficiencias del sector privado, logrando agilizar los plazos de obras, controlar el presupuesto de inversión y finalmente proveer un adecuado servicio de operación y mantenimiento de la infraestructura."*<sup>56</sup>

Para la reglamentación de la Ley 1508 de 2012 y su adecuado desarrollo, aplicación y control, destacamos los siguientes puntos.

#### A. Definición

Define la Ley en su artículo 1º las Asociaciones Público Privadas como; un instrumento de vinculación de capital privado, para proveer de bienes públicos y de servicios relacionados. Respecto de la provisión de bienes públicos vale la pena el estudio de este concepto. La jurisprudencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, al respecto del aprovechamiento económico del espacio público, se ha manifestado frente al tema en diversas ocasiones, en sentencia del H. Consejo de Estado --Sección Tercera-- con ponencia del doctor Alirio Eduardo Hernández Enríquez con número de radicación 16596 de 2001, ese Alto Tribunal recopiló los diferentes enfoques que sobre ese concepto jurídico se han construido. En dicha providencia sostiene:

*"A nivel doctrinario existe una interesante discusión sobre la titularidad de los bienes de uso público, pues, en tanto unos sostienen que su propietario es el Estado, otros pregonan que su titular es el pueblo. Al respecto la Corte Constitucional en*

<sup>56</sup><http://www.congresovisible.org/agora/post/las-asociaciones-publico-privadas-app-como-esquemas-eficientes-de-colaboracion/2988/>  
Consultado 16/01/12

sentencia T-150 del 4 de abril de 1995, ha precisado: "Bienes afectados al Uso Público. Se encuentran en cabeza del Estado u otros entes estatales y se caracterizan por ser bienes usados por la comunidad, la cual los puede aprovechar en forma directa, libre, gratuita, impersonal, individual o colectivamente, generalmente tienen que ver con los intereses vitales de la comunidad. "Estos bienes no son res nullius, pero respecto de su titularidad existen dos teorías que vale la pena destacar. Para algunos teóricos, el propietario de los bienes de uso público es el Estado, quien ejerce sobre ellos una reglamentación de uso. Esta posición es la que acoge el artículo 674 del Código Civil, los define como aquellos bienes cuyo "dominio pertenece a la República" y el "uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas, puentes y caminos (...)

La segunda teoría es acogida por varios doctrinantes (entre los cuales se destaca Bielsa, Marienhoff, José J. Gómez) quienes consideran que el titular de estos bienes es la colectividad o el pueblo, de suerte que el Estado ejerce únicamente la administración a través de su poder administrativo regulador y reglamentario. La actual Carta Política, superando la controversia doctrinaria, define claramente el titular del derecho de dominio de los bienes públicos (entre los que se encuentran los afectados al uso público), al prescribir: "Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación." Por ser el Estado el representante legítimo de la sociedad política, tiene a su cargo la obligación constitucional y legal de brindar efectiva protección a los bienes de uso público, los cuales forman parte del espacio público, según el art. 82 de la Constitución Política. Por consiguiente, el espacio público se



*encuentra destinado a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, y por esta razón prevalece sobre el interés individual"*

Cualquiera sea la posición si algo es claro, es la especial protección que estos bienes merecen, ya que son elementos esenciales para la provisión de servicios y para la satisfacción de necesidades vitales de los administrados. Sostiene el artículo en mención que la materialización de las asociaciones público privadas se efectúa a través de un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, que involucre la retención y transferencia de riesgos entre las partes, al respecto la Ley establece que la asignación de riesgos se efectuara a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio.<sup>57</sup>

## B. Concesiones

Así, las APP han llegado a Colombia como una política pública regulada ampliamente por la ley, y en una versión que va mucho más allá del escueto desarrollo que para las concesiones tuvo en la Ley 80 de 1993 y el decreto reglamentario 4533 de 2008. Punto esencial resulta entonces que las concesiones sometidas a las normas de contratación estatal en Colombia resultan hoy un desarrollo de la figura contractual de la concesión, de ahí la importancia de tener en cuenta algunos de los elementos esenciales de esta institución.

---

<sup>57</sup> Artículo 4°. *Principios generales.* A los esquemas de asociación público privada les son aplicables los principios de la función administrativa, de contratación y los criterios de sostenibilidad fiscal. Los esquemas de Asociación Público Privada se podrán utilizar cuando en la etapa de estructuración, los estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los dictámenes comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria para su ejecución. Estos instrumentos deberán contar con una eficiente asignación de riesgos, atribuyendo cada uno de ellos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio.

Son más bien escasos los textos académicos que se detienen en el análisis de esta figura, en la literatura nacional, se plantean los siguientes aspectos en la obra de Jorge Bendeck Olivella: hace referencia a varios de los aspectos jurídicos de la *concesión*, dice que esta modalidad de contratación es de fundamental importancia y que tradicionalmente ha sido un contrato público; de igual manera expresa que la palabra *concesión* en la mayoría de los casos ha sido utilizada para hacer referencia a la "posibilidad de que un particular emplee bienes del Estado o preste un servicio del mismo". Entiende que la *concesión*, al pasar de los tiempos, ha tenido un desarrollo muy particular en razón de la dificultad que se le presenta al Estado para llevar a cabo algunos de los servicios que le son propios, bien sea por razones financieras o técnicas.

De igual manera, en el texto *Comentarios al estatuto de contratación administrativa* que tiene por autor a Carlos Betancour Jaramillo, se hace mención al contrato de *concesión* en uno de sus capítulos, allí se plantea el problema terminológico que existe en cuanto a la utilización adecuada del mismo, pues en ocasiones se le llega a dar el nombre de *concesión* a aquello que solo constituye un permiso o licencia, como sucede con ocasión de actividades reglamentadas por la policía, por ejemplo el caso de las licencias de funcionamiento de bares y demás. Determina que:

*"para precisar cuándo hay un simple permiso o licencia y cuando hay una verdadera concesión, debe investigarse si, a falta de la reglamentación policiva, el particular habría podido desarrollar la actividad, o no; en caso afirmativo, se trata de una simple licencia o permiso; en cambio, si el particular habría requerido autorización estatal, se trata de una verdadera concesión".*

Según estos estudios y la legislación en Colombia el tratamiento que se le da a la figura es la de un acto bilateral, lo cual nos ubica en la doctrina contractual que

privilegia una concepción consensual. En efecto este es el carácter que le asigna la Ley 80 de 1993 al igual que el anterior estatuto de contratación pública, Decreto Ley 222 de 1983, al situarla dentro de la categoría de los contratos estatales. Similar configuración recibe la concesión en los contratos de carácter público que regulan diversas leyes especiales<sup>58</sup>. En el marco jurídico vigente en el país la posibilidad de celebrar acuerdos de concesión es total, dado que no existen reservas o restricciones; por el contrario las leyes generales estimulan ese instrumento como en la ley de contratación estatal, ya enunciada. De otra parte en el estatuto general de la administración pública, la Ley 489 de 1998, que autoriza la celebración de contratos para cumplir funciones administrativas<sup>59</sup>. La única limitante obvia es que la pretendida concesión esté inmersa en las funciones propias de la entidad pública concedente.<sup>60</sup>

En los contratos de asociación, la Ley 20 de 1969, además de reglamentar el derecho adquirido sobre propiedades privadas del subsuelo petrolífero del país, el artículo 12 creó lo que en un futuro sería el contrato de asociación, para además el aporte petrolero, como quiera que contribuyó a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, ciertas áreas para que explorara y explotara directamente o en asocio con capital nacional o extranjero, mediante concesión. Esta modalidad

<sup>58</sup> La diferencia entre contrato público y estatal se profundiza en el la sección 4.2 del presente capítulo.

<sup>59</sup> Ley 489 de 1998 artículos 110 a 114.

<sup>60</sup> El inventario de disposiciones legales especiales que se refieren a este mecanismo u otros similares es extenso. A continuación se relacionan algunas de las normas más relevantes producidas a lo largo de mas de dos décadas: 1) Decreto Ley 2310 de 1974, contratos de exploración y explotación de los hidrocarburos que son de propiedad del país, para los cuales existe prohibición legal de usar la concesión. En esta materia se adopta la modalidad de contrato de asociación, figura que cuenta con algunos elementos comunes con la concesión, en especial en aspectos conceptuales y en materia de riesgos. 2) Decreto Ley 1900 de 1990, la Ley 37 de 1993, Decreto 2122 de 1992, contratos de concesión de servicios y actividades de telecomunicaciones. 3) La Ley 37 de 1993, por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones. 4) La Ley 80 de 1993, estatuto de la contratación estatal. 5) Ley 94 de 1993, régimen de contratación del Ministerio de Comunicaciones para la operación de radioaficionados. 6) Ley 105 de 1993, licencias de transporte, contratos de concesión en infraestructura vial y aeronáutica civil. 7) Decreto 757 de 1993, relativo a concesión en transporte masivo. 8) Ley 139 de 1994, concesión directa de incentivos para preservar zonas boscosas. 9) Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 10) Decreto 229 de 1995, contratos de concesión y licencias de los servicios postales. 11) Ley 489 de 2000 que regula el cumplimiento de funciones administrativas por particulares. 12) La Ley 555 de 2000 de concesión de comunicación personal PCS. 13) Ley 643 de 2001, por la cual se reglamenta la concesión de juegos de suerte y azar. 14) La Ley 680 de 2001, por la cual se reforman las leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1998 y se dictan otras disposiciones en materia de televisión. 15) Documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que si bien son los instrumentos que fijan los lineamientos de la política pública, ocasionalmente introducen lineamientos de carácter imperativo.

tuvo una precaria iniciación, amén de su corta existencia, pues tan solo al comienzo del lustro siguiente ya se modificó el sistema de contratación petrolera con la expedición del Decreto 2310 de 1974.<sup>61</sup>

Los sistemas de concesión en materia petrolera, existieron en Colombia hasta la expedición del Decreto 2310 de 1974, que abolió el sistema de concesiones y por ende el de aporte; y adoptó una política que otorgó a Ecopetrol la facultad exclusiva de llevar a cabo la exploración y explotación de los hidrocarburos de propiedad nacional, de tal suerte que se le dieron a la mencionada empresa amplias facultades para adelantar estas actividades, bien sea en forma directa, o también mediante contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, bajo las modalidades de asociación, de servicios o de cualquier otra naturaleza, distinta de los de concesión<sup>62</sup>. Situación modificada por el Decreto 1760 de 2003, que tiene su origen en la Ley 790 de 2002, aquel en su artículo 57 deroga el Decreto 2310 de 1974. Cabe señalar además que esta es una materia exceptuada expresamente de aplicar la Ley 80 de 1993, por disposición de su artículo 76.

Frente a la proliferación de la figura que se puede apreciar en diversos campos del Estado, que se evidencia en la relación que se acaba de elaborar, detenemos en el análisis de cada modalidad de concesión excedería los propósitos de la obra. Nuestra intención es destacar los elementos esenciales de la figura, identificar los elementos conceptuales y valorar algunos riesgos especiales que conlleva esta modalidad de acuerdos.

En esta aproximación es primordial entonces valorar la definición que trae la Ley 80 de 1993 que en su artículo 32 se refiere a los contratos estatales y para la figura de la concesión señala en su numeral 4o:

<sup>61</sup>Arce Rojas, David. *Naturaleza legal de los contratos petroleros*, Revista Universitas número 87, Bogotá, 1994, pág. 81

<sup>62</sup>Arce Rojas, David. *Camino a un nuevo régimen contractual petrolero*, Arce Rojas Consultores & Cia Ltda. Bogotá

*"Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden".*

De acuerdo con la definición legal citada del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la *concesión de obra pública o bien*, hace relación a su construcción, su explotación o su conservación, sea total o parcial, que con una finalidad de atender un servicio público, o, para el funcionamiento de una obra o de un bien, un concesionario asume por su cuenta y riesgo a cambio de una remuneración. Esta última puede estipularse en las siguientes modalidades básicas: 1) El cobro de un derecho, tarifa, tasa o valorización, 2) Una participación que se le otorgue por la explotación del bien, 3) Una suma que puede ser periódica, única o porcentual, 4) Cualquier otra modalidad de remuneración que acuerden las partes que es cobrada por parte del concedente al usuario en un tiempo determinado.

De lo visto para esta modalidad de contrato surgen como cláusulas obligatorias inherentes a su naturaleza las siguientes: sometimiento del contrato al reglamento y a los términos de referencia de la entidad concedente; definición de las

obligaciones que se encuentran a cargo del concesionario con sus respectivas unidades de tiempo; la constitución de una interventoría; la responsabilidad del concesionario por pérdida o deterioro de los bienes. Adicionalmente es imperativo pactar las cláusulas excepcionales de la Ley 80 de 1993, como son la terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad; debido al riesgo que se corre en esta modalidad de contratos la administración contratante debe asegurarse por todos los medios contractuales que el objeto del contrato se cumpla de la mejor manera posible, buscando de esta forma prever los riesgos distribuidos o asignarlos a la parte que mejor los controle y así disminuir la probabilidad de su ocurrencia.

La reversión es una figura que se pacta únicamente en los contratos de concesión de bienes del Estado; esta cláusula implica que una vez finalizado el término de la explotación o concesión, aquellos elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por esta razón aquella deba efectuar compensación alguna. Esta cláusula supone que el contrato debe terminar para que ella se haga efectiva; pero la discusión se ha presentado respecto del momento y forma de terminación del mismo, pues en algunos casos puede presentarse la caducidad o la terminación anticipada por mutuo acuerdo, casos en los que la figura de la reversión no sería una compensación suficiente, puesto que probablemente al momento de hacerla efectiva, los bienes que se reciben no representan mayor utilidad para el Estado.

La concesión de servicio público o de funciones administrativas es otra de las categorías que surge nítidamente del texto legal analizado. Esta modalidad de concesión tiene como objeto otorgar a una persona, denominada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, de manera total o parcial, de un servicio público, con la finalidad última de que se desarrollen todas las actividades que sean necesarias y pertinentes para llevar a cabo de una manera expedita la prestación de dichos servicios o funciones. Con lo anterior no

se quiere significar que sea necesario que al realizarse un contrato de concesión, deban cumplirse todos los anteriores objetivos, el contrato puede consistir en el desarrollo de uno o varias de las actividades señaladas.

La concesión aludida, también implica una remuneración. Para llevar a cabo esta concesión se entiende que el particular es quien asume el servicio público, sin querer decir con esto que la entidad estatal pierda el control sobre la concesión que se está llevando a cabo. Esta última característica es una de las diferencias que existe con la asociación de servicio público, en la que el particular contribuye pero no asume el servicio. De ahí que al concesionario le son aplicables las mismas normas que le serían a la administración, frente al usuario del servicio, ya que sus derechos y garantías no se pueden desmejorar o limitar porque sea un particular y no la administración directamente. En este sentido abunda jurisprudencia sobre la aplicación de las normas del derecho administrativo cuando es un particular el prestador del servicio; por otra parte en esta opción se debe aplicar la Ley 489 de 2000 cuando se cumplen funciones administrativas.

Este es el momento definitorio del negocio, se sientan las bases económicas, técnicas y jurídicas de la concesión cuya vocación es el largo plazo, ya que no existe un término legal mínimo o máximo y su duración es casi siempre superior a diez años. Por lo mismo, la administración en los pliegos de condiciones o términos de referencia y preferiblemente en un acto especial, de carácter general regulatorio que se denomina reglamento, debe establecer los parámetros fijos y variables que determinen las condiciones precisas de manejo y explotación del bien, obra o servicio.

Los contratos de concesión, contemplados en el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, celebrados por entidades estatales con el objeto, de otorgar la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o

servicio por cuenta y riesgo del concesionario a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden, a partir de la vigencia de la Ley 1508 se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de Asociación Público Privadas, vale la pena destacar que las concesiones vigentes al momento de la promulgación de la presente ley se seguirán rigiendo por las normas vigentes al momento de su celebración.

Los acuerdos de asociación público privada hoy tienen origen en la Ley 1508 de 2012, que en su artículo primero define esta modalidad de acuerdos y en el artículo 32 numeral 4, de la Ley 80. Ya que en la primera de estas leyes se establece en el artículo segundo que las concesiones de la Ley 80 de 1993 se encuentran comprendidas dentro de los esquemas APP, así también quedan comprendidas dentro de la nueva legislación los artículos relativos a: concesión de los servicios y de las actividades de telecomunicaciones, concesión del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional, del régimen especial para las entidades estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones respectivamente, 33, 34, y 38 de la Ley 80 de 1993, limitados por la ley 1431 de 2009 en cuanto a su aplicación<sup>63</sup>.

### C. Ámbito de aplicación

Para que un proyecto sea estructurado bajo un modelo APP, el monto de inversión de este deberá ser superior a seis mil (6.000) smmuv, lo que equivale a COL\$ 3400,200.000. lo que equivale a tres mil cuatrocientos millones doscientos mil pesos. El modelo APP es aplicable a los contratos donde el objeto sea: el diseño

<sup>63</sup>Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 10, y 11 de la Ley 1341 de 2009.



construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, de la infraestructura para la prestación de servicios públicos. Los esquemas de Asociación Público Privada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 en cuanto a los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos que se requieran para su materialización, como lo señala el artículo 3º de la Ley 1508 de 2012; (...) *Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos que incluyan esquemas de Asociación Público Privada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las materias particularmente reguladas en la presente ley.*

De la aplicación de diversos artículos de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás disposiciones que las modifican o complementan además de las normas y principios fundamentales de la institución de las APP las actuaciones que se desarrollen en su aplicación deberán observar los principios de : transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, conmutatividad y equilibrio económico y en general las normas que se deben regir los servicios públicos cuando son prestados por los particulares bajo los principios constitucionales de la función administrativa, previstos en el artículo 209 constitucional, así, como los principios de la gestión fiscal, contemplados en los artículos 209 y 267 de la Carta; a saber: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, equidad y valoración de los costos ambientales, sometidos al control fiscal y a la jurisdicción contencioso administrativa

Curiosamente, fueron excluidas del ámbito de aplicación de la ley APP, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación inferior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación del Estado inferior al cincuenta por ciento (50%), las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuando desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector

privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados cuando estos obren como contratantes.

A los esquemas de asociación público privada les son aplicables los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, los de contratación ambos referidos anteriormente y los criterios de sostenibilidad fiscal sobre los cuales vale la pena detenerse en el estudio. En Colombia, la Constitución de 1991 trajo como grandes innovaciones la definición del Estado colombiano como un Estado social de derecho. En lo económico, es la administración Santos la que introduce reformas en nuestro régimen constitucional y legal con el objeto de encauzar la interpretación constitucional, por un lado, y los instrumentos de política fiscal, por el otro, hacia la protección efectiva de la capacidad económica del Estado. El Acto Legislativo 03 de julio de 2011<sup>64</sup>,

<sup>64</sup> Acto legislativo 03 de 2011, Artículo 10. El artículo 334 de la Constitución Política quedará así:

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá funcionar como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el bienestar social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.

El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oírán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.

Artículo 20. El primer inciso del artículo 339 de la Constitución Política quedará así:

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal.

Artículo 20. El primer inciso del artículo 340 de la Constitución Política quedará así:

El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.

introduce en la Constitución el criterio de sostenibilidad fiscal como fundamento básico para la administración del Estado por parte de las tres ramas del Poder Público, y la Ley 1473, del mismo año, crea por primera vez una regla fiscal numérica para el gobierno central. Este esfuerzo se inicia en 1997, con la expedición de la llamada Ley de Semáforos y la Ley 617 del 2000, las cuales imponen reglas fiscales numéricas a los gobiernos locales, y continúa con la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2003, que introduce la obligación de preparar el “marco fiscal de mediano plazo” creando una regla fiscal para el consolidado del sector público.<sup>65</sup>

#### D. Plazo, Adiciones y Prorrogas

Respecto al plazo, adiciones y prorrogas la norma establece lo siguiente: para la ejecución de proyectos de asociación público privada, establece la norma un plazo máximo de treinta (30) años, incluidas las posibles prorrogas al mismo, siendo esta la regla general, pero se establece también que si en la estructuración financiera, y antes del proceso de selección, el proyecto resulta viable con un plazo mayor a los treinta (30) años, como excepción, podrán celebrarse contratos de asociación público privadas previo concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. Respecto a las adiciones y prorrogas sólo se podrán hacer ediciones y prórrogas relacionadas directamente con el objeto del contrato, después de transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de cumplir las primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en el contrato.<sup>66</sup>

<sup>65</sup><http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Actualizaciones/nota-por-que-el-criterio-de-sostenibilidad-fiscal-en-la-constitucion/nota-111>  
consultado 19/01/12

<sup>66</sup> Artículo 7° Ley 1508 de 2012.

## E. Proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública y Proyectos de Iniciativa Privada

La Ley 1508 de 2011 se estructuró, haciendo una división de los proyectos de asociación público privada de iniciativa pública y los proyectos de asociación público privada de iniciativa privada, dotando a cada uno de unas características particulares. En lo que a proyectos de iniciativa pública respecta, se estableció para la selección de contratistas de proyectos de asociación público privada de iniciativa pública, la facultad de utilizar el sistema de precalificación, conformando una lista de precalificados mediante convocatoria pública, estableciendo un grupo limitado de oferentes para participar en el proceso de selección. La selección objetiva se materializará mediante la selección del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, debe entenderse como oferta más favorable para los efectos de esta Ley, aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, represente la mejor oferta o la mejor relación costo-beneficio para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en los pliegos.

Surge también para la entidad estatal que invita a participar la obligación de contar con los siguientes requisitos antes de dar inicio al respectivo proceso: 1) *estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, la descripción completa del proyecto incluyendo diseño, construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato. El modelo financiero estatal tendrá reserva legal.* 2) *Evaluación costo beneficio del proyecto analizando su impacto social, económico y ambiental sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios socioeconómicos esperados.* 3) *Justificación de utilizar el mecanismo de*

asociación público privada como una modalidad para la ejecución del proyecto, de conformidad con los parámetros definidos por el Departamento Nacional de Planeación. Los análisis señalados en este numeral deberán contar con concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de planeación de la respectiva entidad territorial. Para el anterior concepto, se deberá contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto de las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales, en desarrollo de los Esquemas de Asociación Público Privada, en los términos definidos en la Ley 448 de 1998. 4) Análisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no generación o reproducción de condiciones de riesgo de desastre. 5) La adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos, posibles contingencias y la respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto.<sup>67</sup>

En Los proyectos de iniciativa pública las adiciones de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos al proyecto no podrán superar el 20% del valor del contrato. En lo que a las prórrogas respecta estas deberán ser valoradas por la entidad estatal competente, al respecto surge un primer interrogante, ¿ Es la entidad estatal de cuya iniciativa emana el proyecto la competente, o no ser así, que entidad es competente para ello ?

Ahora bien en la estructuración de proyectos de infraestructura pública o para la prestación de sus servicios asociados de iniciativa privada, los agentes estructuraran los proyectos por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la estructuración. Los proyectos se presentaran de forma confidencial y bajo reserva a consideración de las entidades estatales competentes. El proceso de estructuración del proyecto por agentes privados estará dividido en dos (2) etapas descritas a continuación.

---

<sup>67</sup> Artículo 11 Ley 1508 de 2012.  
Informe de Labores  
Ministerio de Transporte

En la etapa de pre factibilidad la iniciativa privada debe contener una descripción completa del proyecto, alcance del mismo, estudios de demanda, especificaciones, costo estimado y fuente de financiación, en esta etapa la entidad estatal a quien se le presenta el proyecto dispondrá de un plazo máximo de tres (3) meses para verificar si la propuesta, al momento de ser analizada, es de su interés de conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de proyectos a ser desarrollados y la viabilidad de la misma, resulta interesante lo que respecto a la responsabilidad en esta etapa establece la norma ya que tal verificación no genera ningún derecho al particular, ni obligación para el Estado. Cuando existan varios originadores para un mismo proyecto tendrá prioridad para su estudio el primero que radique una oferta ante la entidad estatal competente y que posteriormente sea declarada por esta como viable.

En la etapa de factibilidad empieza una vez dada la verificación de la propuesta como viable y permitirá que el originador de la propuesta pueda continuar con la estructuración del proyecto y realizar mayores estudios, repitiéndose la regla de responsabilidad para el Estado, no estando este obligado. La iniciativa a de contener, el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, una descripción detallada de las fases y duración, justificación del plazo del contrato, análisis de riesgos asociados, estudios de impacto ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica. En etapa de factibilidad, la entidad estatal competente dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de su radicación, para la evaluación de la propuesta y las consultas a terceros y a autoridades competentes, este estudio lo podrá hacer directamente o a través de terceros. Se podrá prorrogar los términos del estudio hasta por un plazo igual a la mitad del plazo inicial, para profundizar en sus investigaciones o pedir al originador del proyecto que elabore estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto. Si realizados los estudios pertinentes la entidad pública

competente considera la iniciativa viable y acorde con los intereses y políticas públicas, así lo comunicará al originador informándole las condiciones para la aceptación de su iniciativa, contrario caso si la iniciativa resulta inviable deberá expedir acto administrativo motivando la decisión.

La posibilidad de adquirir los estudios por parte de la entidad constituye una novedad, dado el caso de rechazo de la iniciativa y atendiendo a los intereses y utilidad que la entidad pueda dar.

Si la ejecución del proyecto requiere el desembolso de recursos públicos que no podrán ser superiores al 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto, se abrirá una licitación pública para seleccionar al contratista que adelante el proyecto que el originador ha propuesto, proceso de selección en el cual quien presentó la iniciativa tendrá una bonificación en su calificación entre el 3 y el 10%. Al respecto surge el segundo interrogante ¿Admite la licitación pública en términos del artículo 2, numeral 1 de la Ley 1150 un sistema de precalificación?

Todas aquellas inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos, ni modificaciones en plazo podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal competente de reconocer, compensar o retribuir dicha inversión. La publicación de estas iniciativas se hará por un término no inferior a un (1) mes ni superior a seis (6) meses, dependiendo de la complejidad del proyecto, en la página web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública "SECOIP".

Transcurrido el plazo de la publicación pueden ocurrir dos hipótesis: la primera que no se presente ningún interesado distinto al originador del proyecto que manifieste a la entidad estatal competente su interés de ejecutarlo y cumpla las condiciones para participar en su ejecución, en este caso o bajo esta primera hipótesis se podrá contratar con el originador, de manera directa en las

condiciones pactadas. La segunda, que se presente un interesado en ejecutar el proyecto, en las condiciones pactadas entre la entidad estatal competente y el originador del proyecto, manteniendo todas las condiciones por medio de una manifestación no específica la norma de que tipo y lo mas importante garantizar la presentación de la iniciativa mediante una póliza de seguros, un aval bancario u otros medios autorizados por la ley. En ese caso, la entidad deberá abrir un proceso haciendo uso de la metodología establecida para los procesos de selección abreviada de menor cuantía con precalificación, y es aquí donde surge el tercer interrogante ¿Admite la selección abreviada en términos del artículo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 un sistema de precalificación? De una lectura rápida de la ley 1150 se evidencia que la única modalidad de selección que tiene previsto un sistema de precalificación es el concurso de meritos en los términos del artículo ya mencionado, numeral 3.

Respecto a disposiciones generales para los contratos ya sea que sean de iniciativa pública o privada estos deberán incluir en su clausulado, la caducidad, terminación unilateral y las demás establecidas en la ley.<sup>68</sup>

#### F. Medidas en cuanto a los recursos

En lo que a los recursos concierna, se establecen una serie de medidas: 1) con el fin de prevenir de prevenir actividades u operaciones de lavado de activos. Los proponentes que participan en procesos de selección para el desarrollo de esquemas de Asociación Público Privada deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro contrato, así como el origen de sus recursos.<sup>69</sup> 2) Los recursos públicos y todos los recursos que se manejen en el proyecto deberán ser

<sup>68</sup> Artículo 22 Ley 1508 de 2012

<sup>69</sup> Artículo 23 Ley 1508 de 2012



administrados a través de un patrimonio autónomo constituido por el contratista, integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados al proyecto.

#### G. Registro Único de Asociación Público Privada, RUAPP

La norma crea el Registro Único de Asociación Público Privada, RUAPP, bajo la administración del Departamento Nacional de Planeación en este se incorporarán los proyectos que el Gobierno Nacional o las entidades territoriales considere prioritarios, los proyectos de Asociación Público Privada en trámite tanto a nivel nacional y territorial, su estado de desarrollo y los proyectos de Asociación Público Privada que han sido rechazados.

#### H. Vigencias Futuras

En lo que a vigencias futuras respecta la Ley contempla que para proyectos de Asociación Público Privada se podrá autorizar la asunción de compromisos de vigencias futuras, hasta por el tiempo de duración del proyecto, el CONFIS, previo concepto favorable del Ministerio del ramo, del Departamento Nacional de Planeación y del registro en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, BPIN, será el encargado de autorizar la asunción de dichos compromisos. Cada año, al momento de aprobarse la meta de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, previo concepto del Consejo de Política Fiscal CONFIS, definirá el límite anual de autorizaciones para comprometer estas vigencias futuras.

#### I. Tasa por Adición y Prorroga

Iván Darío Gómez <sup>134</sup>

Resulta interesante la creación de la tasa por adición y prórroga a título de contraprestación por los estudios que debe adelantar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dar trámite a la solicitud, al momento de realizar una solicitud de adición o prórroga de un contrato. La tasa corresponde al diez (10) por ciento del valor solicitado si es una adición al contrato o el uno (1) por ciento del valor inicialmente pactado cuando se trata de una prórroga del mismo. Dado el caso que el proyecto haya sido sometido a consideración del Consejo Nacional de política Económica y Social CONPES, la tasa correspondiente se reducirá al (2%) dos por ciento del valor solicitado, si es una adición al contrato.<sup>70</sup>

#### J. Derogatorias

Sobre las derogatorias, finalmente fue derogado el artículo 32, parágrafo 2 de la Ley 80 de 1993, sobre lo cual ya nos referimos, adicionalmente, fue derogado el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007, materia de diversos cuestionamientos por los organismos de control y varios doctrinantes, y cuyo inciso fue derogado recientemente por la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 276, el mencionado artículo señalaba:

*"En los contratos de concesión de obra pública, podrá haber prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado, independientemente del monto de la inversión, siempre que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos. Respecto de concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial."*

### **3. ESTUDIO NORMATIVO SOBRE LA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO**

El estudio normativo contiene las disposiciones que regulan la expropiación administrativa y judicial para la adquisición de predios con el fin de llevar a cabo proyectos en distintos sectores. El estudio con las normas antes mencionadas se adjunta en CD.

### **4. RESEÑA DE ACTIVIDADES 2012**

En el marco de lo expuesto hemos cumplido con las tareas de asesoría para el periodo comprendido entre enero y febrero de 2012.

Por último se presentara una propuesta de reglamentación la cual compilara los distintos puntos expuestos en las mesas de trabajo con los distintos representantes de las entidades del sector transporte, tales como el INVIAS, la AEROCIVIL, el IGAC y la ANI.